



Mundo encerrado, desarrollo pausado

Una evaluación de la sociedad civil sobre la (in)eficacia de la respuesta a Covid-19

SINTESIS GLOBAL



Mundo encerrado, desarrollo pausado

Informe especial de la AOED sobre la (in)eficacia de la respuesta a la COVID-19

© Alianza de OSC para la Eficacia del Desarrollo (AOED), 2021

Algunos derechos reservados

La AOED tiene los derechos de esta publicación.

La publicación puede ser citada en partes siempre que se acredite adecuadamente a la AOED y se faciliten copias del trabajo final donde aparezca la cita.

CSOPartnership 
for **Development Effectiveness**

The CPDE Global Secretariat
3rd Floor, IBON Center
Diliman, Quezon City 1103
Metro Manila, Philippines

Con el apoyo de



 csopartnership.org

 [@CSOPartnerships](https://www.facebook.com/CSOPartnerships)

 [@CSOPartnerships_](https://twitter.com/CSOPartnerships)

 [bit.ly/CPDELinkedIn](https://www.linkedin.com/company/csopartnerships)

 [@csopartnerships](https://www.instagram.com/csopartnerships)

ORGANIZACIONES QUE CONTRIBUYERON A LA INVESTIGACIÓN



MIEMBROS DEL EQUIPO DE TAREAS DE COVID-19 DE LA AOED

Justin Kilcullen, Monica Novillo, Luca De Fraia, Nurgul Djanaeva, Thilak Kariyawasam, Josefina Villegas, Ernest Gibson, Jenison Urikhimbam

ÍNDICE

1	Introducción	
3	Resumen Ejecutivo	
3	1a Parte - Síntesis Global	
7	La pandemia Covid-19 en un mundo globalizado	55
9	Impacto socioeconómico de Covid-19	58
	Impacto económico	
	Impacto en sectores marginados y vulnerables	
	Protecciones sociales y medidas económicas para minimizar el impacto	
	Un entorno inhabilitante para la población y las OSC	
23	Cómo COVID-19 ha afectado a las tendencias de la AOD	
29	Evidenciando la eficacia en la respuesta al COVID-19	
	Principios CED en tiempos de COVID-19	
	Análisis de la eficacia de la respuesta al COVID-19	
	<i>Sobre el principio de la propiedad</i>	
	<i>Sobre el principio de alianzas inclusivas</i>	
	<i>Sobre el principio de transparencia y responsabilidad</i>	
	<i>Sobre el principio del enfoque en los resultados</i>	
	<i>Sobre el principio de no dejar a nadie atrás y la aplicación de los derechos humanos en la respuesta al COVID-19</i>	
51	Buenas prácticas de las OSC para aprovechar lo principios de la CED en su respuesta al COVID-19	
	Operaciones de auxilio nacionales y locales	
	Facilitando la ayuda humanitaria internacional	
	Difusión de información y educación	
	Asistencia legal y monitoreo	
	Investigación y evaluación de las necesidades de las circunscripciones	
	Incidencia de políticas asegurando transparencia y rendición de cuentas	
	Síntesis de Recomendaciones Claves	
	Referencias	



Introducción



La pandemia de COVID-19 ha provocado una serie de repercusiones políticas y socioeconómicas que seguirán afectando al mundo en los próximos años. Las repercusiones de la pandemia en el empleo, la pobreza, la seguridad alimentaria y el crecimiento económico, según las previsiones de diversas organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, no tienen precedentes.

La pandemia del COVID-19 ha desencadenado y exacerbado la desigualdad inherente a la economía global neoliberal. Mientras que la pandemia ha afectado a casi toda la población mundial sus impactos han sido más fuertes en los sectores más empobrecidos y marginados. Mientras tanto, los multimillonarios y las grandes empresas del mundo han aumentado su riqueza.

Además de los impactos sobre la vida y la salud, las políticas posteriores de COVID-19 y otras medidas gubernamentales también han provocado violaciones de los derechos civiles y políticos, las libertades y los espacios democráticos. Al mismo tiempo, la

pandemia también ha afectado significativamente a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y las comunidades con las que trabajan en todo el mundo de diversas maneras. Las OSC que trabajan sobre el terreno han denunciado la falta de transparencia en los programas y la financiación frente al COVID-19, la falta de participación de las OSC en las políticas y la respuesta, e incluso la represión política directa.

Los impactos de la pandemia, que agravan las crisis socioeconómicas preexistentes, amenazan con desbaratar la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) han pedido a las IFI y a los actores del desarrollo que se alivie la deuda, se reduzca la austeridad, se concedan menos préstamos y se aumente la cooperación internacional para ayudar a afrontar las crisis. Antes de la pandemia, la comunidad internacional ya se había quedado corta en el cumplimiento de los compromisos de cooperación al desarrollo.



La Asociación de OSC para la Eficacia del Desarrollo (AOED) presenta su informe 'Mundo encerrado, desarrollo pausado' como parte del compromiso de la plataforma de trabajar por una cooperación al desarrollo eficaz y contribuir a la consecución de los ODS.

Esta publicación presenta 29 estudios de caso de 33 países realizados por cinco (5) circunscripciones regionales y seis (6) sectoriales entre agosto y noviembre de 2020. También se presenta una síntesis global que resume los temas comunes. Estos estudios se presentaron, debatieron y validaron inicialmente a través de seminarios web regionales y sectoriales y de la Conferencia Política de la AOED 2020. Los grupos que participaron fueron Regiones (África, Asia, Europa, América Latina y el Caribe y Oriente Medio y Norte de África) y Sectores (Grupos Feministas, Organizaciones Religiosas, Pueblos Indígenas, Migrantes y Diáspora, Rural y Juventud).

Basada en los principios de la cooperación eficaz al desarrollo (CED)¹, esta investigación analiza la aplicación de las medidas

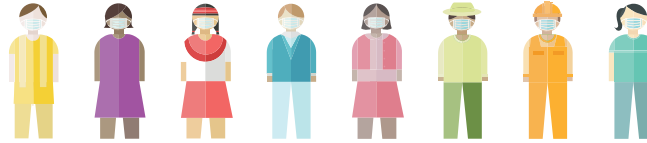
gubernamentales, extrae lecciones de las estrategias y buenas prácticas de las OSC y presenta algunas recomendaciones para mejorar la respuesta a la pandemia. También se analizan las pruebas sobre los impactos diferenciados de la pandemia y las respuestas de las distintas partes interesadas en varios países. El análisis también incluye el principio de No dejar a nadie atrás y el enfoque del desarrollo basado en los derechos humanos.

A través de este documento, la AOED espera iluminar la situación de las comunidades de base y las OSC en medio de la pandemia y apoyar los compromisos informados con los países socios, los actores del desarrollo y otras partes interesadas para hacer más efectiva la cooperación internacional. La plataforma espera que las conclusiones de esta publicación contribuyan a la elaboración de políticas adecuadas y receptivas basadas en los principios de apropiación, inclusión, transparencia y responsabilidad y respeto de los derechos humanos. Por último, la AOED espera contribuir a los esfuerzos que desafían el sistema económico y político fundamentalmente defectuoso hacia una sociedad más humana para todos.

¹ Country Ownership, Transparency and Accountability, Focus on Results, and Inclusive Partnerships.



Resumen Ejecutivo



Antecedentes

Esta investigación sigue el documento marco para proporcionar una base de pruebas en la aplicación de los Principios de Busan para la Cooperación Eficaz al Desarrollo (también conocidos como Principios CED) en la respuesta de COVID-19. Los Principios son: 1) apropiación por parte del país, 2) alianzas inclusivas, 3) transparencia y responsabilidad, y 4) enfoque en los resultados. El documento marco también incluyó los principios del Enfoque Basado en los Derechos Humanos (EBDH) y el de "No dejar a nadie atrás", que anclan la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Métodos

Las circunscripciones regionales y sectoriales de la AOED investigaron la aplicación de los principios de la CED en las respuestas de COVID-19, teniendo en cuenta los contextos específicos de cada país o sector. Cinco (5) regionales y seis (6) circunscripciones sectoriales











participaron en esta iniciativa. La investigación se llevó a cabo en 33 países.

Las circunscripciones participantes utilizaron el documento marco de la AOED, con cierta flexibilidad contextual, para orientar su investigación en el país. Utilizaron diversos métodos de recopilación de datos (por ejemplo, investigación documental, entrevistas con informantes clave y encuestas) según lo consideraron oportuno. Todos los estudios presentaron y analizaron datos sobre los siguientes temas 1) impacto socioeconómico del COVID-19; 2) medidas gubernamentales; 3) aplicación de los Principios de la CED; 4) aplicación del Enfoque Basado en los Derechos Humanos (EBDH) y/o No Dejar a Nadie Atrás; 5) las buenas prácticas de las OSC para potenciar la eficacia de la respuesta al COVID-19, y; 6) las recomendaciones.

Las principales conclusiones y recomendaciones de los estudios de caso se resumieron en una síntesis global. La síntesis también analiza las tendencias del impacto socioeconómico de la pandemia, las nuevas tendencias de la ayuda oficial al desarrollo (AOD) y las implicaciones para la CED.



Países que contribuyeron a la investigación

Región	País	Sector	País
África 	Gabón Kenia Nigeria	Organizaciones Religiosas 	Zimbabue
Asia 	India Kirguistán Filipinas	Grupo Feminista 	Kirguistán
Europa 	Albania Armenia	Pueblos Indígenas 	Filipinas
LAC 	El Salvador Honduras Guatemala México Nicaragua Argentina subregión andina (Ecuador, Perú, Venezuela)	Migrantes y Diáspora 	Hong Kong Tailandia
		Rural 	Indonesia Filipinas Bolivia
MENA 	Argelia Irak Yemen	Juventud 	Afganistán Bulgaria Camerún Colombia Egipto El Salvador India Líbano Sur de África Zimbabue

Limitaciones

Los estudios de caso se centraron principalmente en dos Principios de CED (es decir, la apropiación por parte del país y las alianzas inclusivas), a los que se añadieron el EBDH y el principio de no dejar a nadie atrás. En consecuencia, es posible que algunos de los estudios de casos no contengan datos y análisis sobre los otros dos Principios.

Los estudios de casos se realizaron entre agosto y noviembre de 2020, por lo que es posible que no reflejen plenamente la rápida evolución sobre las noticias e informaciones relacionadas con COVID, así como las correspondientes respuestas de los gobiernos, las instituciones internacionales, las OSC y otros actores del desarrollo.

Panorama de los hallazgos

Apropiación de los países: la aplicación del principio de apropiación por parte de los países en las estrategias de COVID-19 es desigual. Muchos gobiernos nacionales han elaborado planes nacionales o estrategias gubernamentales nacionales para hacer frente a la pandemia, que han incorporado también las prioridades nacionales de desarrollo. Sin embargo, la mayoría de los gobiernos nacionales no han incluido, o sólo han permitido una participación mínima de las partes interesadas clave, como las OSC, las organizaciones populares, los sectores marginados, los sindicatos y las asociaciones de profesionales de la salud, etc., en la elaboración o la puesta en marcha de los planes nacionales. Muchos países también informaron del aumento del papel de los militares en la planificación y ejecución de las respuestas, lo que pone en duda la legitimidad del proceso.



Algunos países señalan que los donantes utilizaron sistemas nacionales para canalizar la ayuda de COVID-19, pero hay pocas pruebas de que dicha ayuda esté armonizada debido a la falta de participación de otras partes interesadas en la coordinación y la planificación. Algunos países informan incluso de denuncias de corrupción relacionadas con la ayuda exterior. Además, los países y organismos donantes comparten que, si bien apoyan las estrategias de los gobiernos nacionales, no hay suficientes datos sobre las condicionalidades ocultas de la ayuda internacional.

Alianzas inclusivas. En general, las OSC no han sido tratadas como actores del desarrollo por derecho propio en la respuesta a COVID-19. Además de su exclusión en la formulación de las estrategias nacionales, muchos gobiernos también restringieron el espacio en el que las OSC desempeñan sus funciones y mandatos. Estas acciones van desde la no creación de espacios formales para que las OSC participen y la constrictión de los espacios legales para que las OSC operen, hasta la represión de las OSC y otras formaciones organizadas, especialmente las que son críticas con las políticas del COVID-19. En los países en los que se concede algún espacio a las OSC, sólo se invitó o se permitió participar a las OSC más grandes, más establecidas y más afines al gobierno.

Transparencia y rendición de cuentas. El nivel de adhesión a los principios de transparencia y rendición de cuentas es escaso en la respuesta de COVID-19 en los casos estudiados. Aunque muchos gobiernos han creado portales centralizados y bases de datos públicas, la veracidad de la información y la puntualidad y frecuencia de

su emisión han sido a menudo cuestionadas por los ciudadanos y las OSC. Además, la mayoría de los gobiernos carecen de mecanismos de participación y retroalimentación pública, órganos de supervisión y mecanismos de reclamación.

Enfoque en los resultados. La adhesión a este principio varía según los países. Unos pocos gobiernos nacionales han implementado un marco para monitorear y evaluar el progreso y asegurar que se logren los resultados. Sin embargo, la mayoría de los países carecen de dicho marco. En algunos casos, se informó de las cantidades de ayuda o del presupuesto gubernamental, pero en relación con marcos más amplios de desarrollo sostenible, y no particularmente para la respuesta a la COVID-19. Además, se ha hecho un esfuerzo mínimo por ampliar los resultados, para incluir los esfuerzos en el tratamiento de las debilidades institucionales de los gobiernos nacionales.

Los derechos humanos en el centro de la respuesta a la pandemia y no dejar a nadie atrás. Hay pruebas contundentes de que los derechos humanos han sido violados a la hora de aplicar las respuestas a la pandemia. En los casos regionales y sectoriales, los derechos civiles y políticos, las leyes y las normas han sido obviados o violados, en diversos grados, por los gobiernos, con el pretexto de controlar la pandemia. Muchas respuestas a la pandemia también han llevado a la intensificación de las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales. Y lo que es peor, las víctimas habituales de estas violaciones son los sectores marginados de la población y los activistas críticos con las políticas y programas gubernamentales. .



Recomendaciones

1. Las OSC piden a los gobiernos y donantes que mejoren **la apropiación democrática** de la respuesta al Covid-19 mediante:
 - a. garantizar la asociación estratégica involucrando a las partes interesadas;
 - b. aumentar la movilización de recursos locales
 - c. conceder subvenciones en lugar de préstamos como apoyo a COVID-19; y
 - d. alinear la ayuda oficial al desarrollo (AOD) con las prioridades nacionales de desarrollo y eliminar las condicionalidades.
2. Las OSC hacen un llamamiento a los gobiernos y a los donantes para que practiquen **alianzas inclusivas** mediante:
 - a. la creación de mecanismos y procesos democráticos para una participación y contribución significativas de las distintas partes interesadas, y
 - b. garantizando un entorno propicio para que las OSC actúen como socios del desarrollo por derecho propio.
3. Las OSC piden a los gobiernos y a los donantes que practiquen **la transparencia y la responsabilidad**:
 - a. compartiendo y publicando regularmente información relevante, oportuna y precisa que ayude a las OSC y al público para evaluar la situación, informar sus respuestas y monitorear el desarrollo; y
 - b. creando una plataforma unificada para el acceso ciudadano
3. Las OSC instan a los gobiernos a **centrarse en los resultados** para orientar la toma de decisiones, el monitoreo y la evaluación.
4. Las políticas y los programas dirigidos a los sectores y comunidades marginados deben ser componentes clave de una respuesta **basada en los derechos humanos** que **no deje a nadie atrás**. Por lo tanto, las OSC hacen un llamamiento a los gobiernos para que:
 - a. adopten un enfoque basado en los derechos humanos en la respuesta a la pandemia
 - b. defiendan la igualdad de género
 - c. refuercen el sistema de salud pública y las medidas de protección social, y
 - d. incluyan las necesidades de los sectores marginados en la respuesta a la pandemia.
5. Las OSC piden al gobierno que proteja los espacios cívicos de manera que las OSC puedan operar en un entorno seguro, sin interferencias injustificadas en su práctica y trabajo, y tengan espacios para una participación significativa.



Photo by Dimitriss from Pexels

La pandemia COVID-19 en un mundo globalizado



Alianza de OSC para la Eficacia del Desarrollo (AOED)

El primer caso de la enfermedad del nuevo coronavirus (posteriormente denominada COVID-19) se registró en un mercado mojado en la ciudad de Wuhan (China) en diciembre de 2019. En enero de 2020, las autoridades impusieron un bloqueo en toda la ciudad para frenar la propagación del COVID-19. La continuación de los viajes internacionales y la globalización del comercio y el ocio ayudaron a propagar el virus a diferentes regiones, lo que provocó un crecimiento exponencial de los casos. En marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la enfermedad como pandemia mundial debido a su alcance y gravedad.



De unas pocas docenas de casos a finales de diciembre de 2019, el número de casos mundiales ascendió a 35 millones de personas y 1 millón de víctimas mortales, en octubre de 2020 (OMS, 2020), lo que hace que esta sea la crisis de salud pública más grave desde la pandemia de gripe de 1918.

La pandemia de COVID-19 se desarrolló en el marco de un sistema mundial que da prioridad al crecimiento económico orientado al mercado, que supuestamente se filtra desde las capas sociales más altas hasta las más bajas. Durante casi medio siglo, las políticas económicas se han centrado en el libre comercio y el libre flujo de inversiones, en un menor gasto en servicios públicos y sociales y en la privatización de las empresas paraestatales. La pandemia ha puesto de manifiesto los problemas fundamentales de este sistema, especialmente en el ámbito de la sanidad, en el que los países que aplicaron reformas como la privatización de la sanidad y los seguros, los recortes del gasto público social y el retroceso de las medidas de protección social, entre otras, se vieron muy afectados. Por ejemplo, la reducción de la inversión en salud pública por parte de los gobiernos nacionales dio lugar a hospitales públicos con poco personal y mal equipados, que no están preparados para hacer frente a la inmensidad de la pandemia del COVID-19. El aumento del coste de los sistemas sanitarios privatizados niega a los sectores pobres y marginados el acceso a una atención sanitaria receptiva, adecuada, eficiente y asequible.

La dependencia de las economías en desarrollo en este sistema económico mundial orientado y dirigido por el mercado

(principalmente como resultado de los acuerdos de libre comercio e inversión asimétricos) ha afectado a sus capacidades internas para superar las crisis sociales y económicas (Dearden, 2020). Con los efectos persistentes de la pandemia, las economías en desarrollo están sufriendo la falta de demanda en las exportaciones de productos primarios (Tröster y Küblböck, 2020), la disminución de las remesas de los emigrantes en el extranjero debido a los despidos masivos (Fernandes, 2020) y la debilidad general del consumo interno debido a las políticas de bloqueo. Los cierres y las restricciones a la circulación aplicados para frenar la propagación del COVID-19 han frenado la demanda de bienes de consumo y de fabricación, creando un efecto dominó masivo en toda la cadena de suministro mundial (OIT, 2020a). Las economías que dependen en gran medida del turismo y especialmente de los viajes internacionales, la exportación de mano de obra y las remesas, se han visto gravemente afectadas, ya que las restricciones han limitado la circulación internacional y la oferta mundial (OMT, 2020) (Sayeh y Chami, 2020).

Las economías de ingresos bajos y medios se enfrentan al enorme reto de equilibrar la prestación de ayuda con el agotamiento de los recursos financieros, mientras que los canales tradicionales para aumentar la financiación a través de la ayuda oficial al desarrollo (AOD) se ven amenazados a medida que los países donantes destinan el gasto a políticas internas de mantenimiento del empleo, como los subsidios salariales y otras prestaciones relacionadas.



Photo by Plato Terentev from Pexels

Impacto socioeconómico de COVID-19



Para frenar la propagación del COVID-19, los gobiernos nacionales aplicaron varias políticas, como la restricción de los movimientos, la prohibición de los viajes internacionales y el cierre de las obras, excepto para los servicios esenciales. Según Cheng et. al (2020), la medida más adoptada por los gobiernos fue la aplicación de restricciones en las fronteras exteriores, que fue aplicada por 188/195 países (96,4%). Le siguió el cierre de escuelas implementado en 171 países (87,69%). Mientras tanto, las medidas de cuarentena/ cierre y las restricciones a las reuniones masivas están empatadas en el tercer lugar (165/195 países o el 84,61%). Las medidas menos adoptadas son las pruebas sanitarias (51,8%) y la aplicación de toques de queda (49,23%). El cuadro 1 muestra una lista de las medidas gubernamentales aplicadas hasta mayo de 2020 y recopiladas por el conjunto de datos de eventos de respuesta gubernamental COVID-19.



Impacto Económico

El impacto económico de la pandemia no tiene precedentes en la historia reciente. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) prevé que el producto interior bruto (PIB) mundial se contraerá un 4,2% en 2020 (OCDE, 2020a). En cuanto a los cierres de centros de trabajo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula que, desde junio de 2020, al menos un tercio de la población activa mundial vive en países con cierres de centros de trabajo obligatorios, salvo para los servicios esenciales. Otro 42% de los trabajadores del mundo vive en países con algún tipo de cierre de centros de trabajo, mientras que el 19% vive en países con cierres de centros de trabajo recomendados. En conjunto, el 93% de la población mundial vive en países con diversas formas de cierre de centros de trabajo, lo que crea importantes problemas para el mantenimiento del empleo y la supervivencia de las empresas, en particular las pequeñas y medianas (PYME) (OIT, 2020b).

Las diversas formas de cierre de centros de trabajo han provocado una reducción de las horas de trabajo y un aumento del desempleo. En el segundo trimestre de 2020, en relación con el cuarto trimestre de 2019, la disminución estimada de las horas de trabajo a nivel mundial es del 17,3%, lo que equivale a 495 millones de empleos a tiempo completo (OIT, 2020c). A esto se suma el impacto de la pandemia en la economía informal, que es más vulnerable a las perturbaciones económicas, como las restricciones a la movilidad. La OIT (2018) estimó que la mayoría (más del 60%) de la mano de obra mundial está empleada en la economía informal. Los trabajadores informales dependen de los ingresos diarios, carecen de seguro social y no suelen estar cubiertos por políticas de sustitución de ingresos en comparación con sus homólogos en la economía formal (OIT, 2020d).

La OIT (2020d) estima que la incidencia de la pobreza para los trabajadores de la economía informal aumentará en 21 puntos porcentuales en los países de renta media-alta, en 52 puntos porcentuales en los países de renta alta y en 56 puntos porcentuales en los países de renta baja y baja. Las restricciones a la movilidad también obstaculizaron la seguridad alimentaria al interrumpir los flujos logísticos en la cadena de suministro.

El fuerte descenso de la actividad económica debido a los cierres y las medidas de cuarentena, así como el aumento de las políticas fronterizas externas e internas, tendrán consecuencias duraderas en la población. Un informe publicado por la Universidad de las Naciones Unidas (ONU) sugiere que entre 80 y 395 millones de personas podrían caer en la pobreza extrema (o personas que viven por debajo del umbral de pobreza de 1,90 dólares) como resultado de la pandemia (Sumner, Ortiz-Juarez y Hoy, 2020). Otro informe de la ONU advierte que 96 millones de personas, de las cuales 47 millones son mujeres y niñas, se verán abocadas a la pobreza extrema en 2021 (Azcona et. al, 2020). Según el informe CONCORD Aidwatch 2020, habrá 35,4 millones de nuevos pobres en América Latina, 23 millones de nuevos pobres en el África subsahariana y 16 millones de nuevos pobres en el sudeste asiático (Villota y Casanova, 2020).

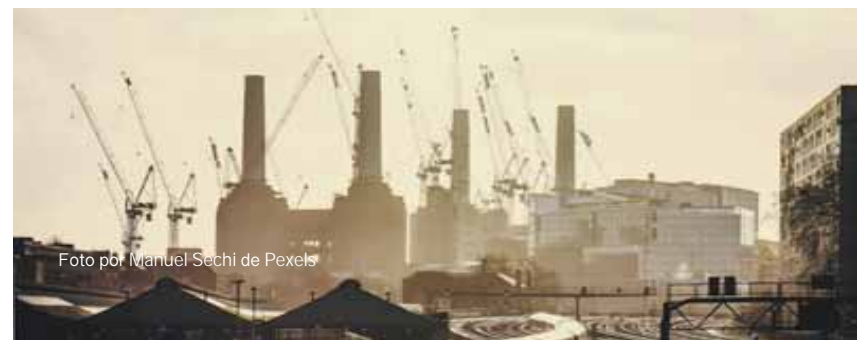




GRÁFICO 1

Medidas gubernamentales para frenar la pandemia de COVID-19



Fuente: Cheng et. al, 2020



Impacto en las regiones

Se prevé que la pandemia provoque una contracción económica en todas las regiones en desarrollo y en las economías avanzadas (FMI, 2020a). El crecimiento del PIB real de las economías avanzadas, frente al 1,7% de 2019, se prevé que sea del -5,8% en 2020. Las regiones en desarrollo también sufrirán contracciones económicas, pero de forma más desigual: Asia en desarrollo (-1,7%), Europa en desarrollo (-4,6%), América Latina y el Caribe (-8,1%), Oriente Medio y Asia Central (-4,1%) y África subsahariana (-3%).

Asia

La pandemia de COVID-19 y las correspondientes medidas de contención, como los cierres y las restricciones a los viajes, han perturbado gravemente las actividades económicas en Asia, lo que ha provocado graves contracciones económicas en distintos países. Por ejemplo, se prevé que India, que ha registrado 9,9 millones de casos de COVID-19 hasta diciembre de 2020, se contraiga un 10,3%. También se estima que el PIB de Kirguistán y Afganistán se contraiga un 10% y un 5%, respectivamente. Además, se prevé que los países del sudeste asiático, cuyas economías se benefician en gran medida de la industria del turismo, también se contraigan.

Se espera que contracciones económicas de esta magnitud tengan un profundo impacto en los niveles de pobreza de la región. Según un informe

del Banco Mundial, se espera que el número de personas que viven en la pobreza en Asia Oriental y el Pacífico aumente a 38 millones a finales de 2020 (Banco Mundial, 2020a). La pandemia también empujará a millones de personas a la pobreza en el sur de Asia, donde tres cuartas partes de la mano de obra total pertenecen al sector informal, muy afectado. El crecimiento del PIB real de Filipinas, Tailandia, Indonesia y Hong Kong en 2020 se proyecta en -8,3%, -7,1%, -1,5% y -7,5%, respectivamente (FMI, 2020a).

África

Las repercusiones económicas de la pandemia de COVID-19 en África también han sido devastadoras. El Banco Africano de Desarrollo (BAfD) proyecta que el PIB regional de África se contraerá entre 0,7 y 2,8 puntos porcentuales para 2020. Esto se traduce en una pérdida del PIB que oscila entre 22.100 millones de dólares y 88.300 millones de dólares en el peor de los casos (Adesina, 2020).

Mientras tanto, el Banco Mundial estima que el crecimiento del PIB en el África subsahariana caerá hasta el -3,3% en 2020, lo que supondría la primera recesión de la región en 25 años (Banco Mundial, 2020b).



La importante interrupción de la actividad económica costará la región al menos 115.000 millones de dólares en pérdidas de producción para 2020. Por ejemplo, la economía nigeriana, que depende del petróleo, ha visto su economía golpeada por los bajos precios del petróleo y el menor comercio internacional. De un bajo previsión de crecimiento del 2,1% para 2020, se espera que la economía nigeriana se contraiga un -3,2% a finales de año, lo que significa que la pandemia de COVID-19 contribuirá a una reducción de 5 puntos porcentuales. También se espera que la ya maltrecha economía de Zimbabue disminuya un 10% debido a las posibles pérdidas en la producción de minerales, el turismo y las remesas extranjeras (PNUD, 2020).

Del mismo modo, se espera que el crecimiento en Camerún y Gabón se espera que disminuya un 2,8% y un 2,7% respectivamente. Por otro lado debido a su economía más diversificada, se espera que el crecimiento de Kenia siga siendo positivo, con un 1%. Debido a los cierres de empresas, a las perturbaciones del mercado y a las pérdidas de puestos de trabajo causadas por la pandemia, se espera que el número de africanos en situación de pobreza extrema aumente a 40 millones (Banco Mundial, 2020b). También se prevé que la disminución de los ingresos nacionales debida a la contracción económica tenga graves repercusiones en el desarrollo de una región marcada por el subdesarrollo masivo y los conflictos políticos.



Latino América y el Caribe

Los impactos en los países de Latinoamérica y el Caribe (LAC) han sido desiguales. Antes de la pandemia de COVID-19, se esperaba que el PIB de la región creciera un 1,6% en 2020. Sin embargo, las previsiones regionales se han atenuado considerablemente y se espera que el PIB se contraiga entre un 8,4% y un 9,1% para 2020, lo que provocará la peor recesión de la región en el último siglo. (OECD, 2020b). La contracción de las economías nacionales ya ha provocado la pérdida masiva de puestos de trabajo. Un estudio de la OCDE prevé que la contracción económica dará lugar a una tasa de desempleo del 13,5%, con 44,1 millones de personas desempleadas (o 18 millones más en comparación con 2019) ("Report Outlines...", 2020).

La pandemia ha puesto de manifiesto desigualdades muy arraigadas en la región. Por ejemplo, el 40% de los trabajadores formales y el 65% de los informales no están protegidos por redes de seguridad, lo que afecta a la capacidad de hacer frente al impacto de los cierres de centros de trabajo y la reducción de las horas de trabajo (OCDE, 2020b, p. 9). Las mujeres se verán doblemente perjudicadas por la pandemia, ya que en su mayoría trabajan en sectores informales que se han visto muy afectados por la pandemia. Ahora se enfrentan a barreras para volver al trabajo, como el aumento de la responsabilidad de cuidados del hogar (ibid, p. 9-10).



MENA

La pandemia de COVID-19 ha afectado a la región de Oriente Medio y Norte de África (MENA) cuando todavía estaba tambaleando por la caída de la demanda mundial y de los precios del petróleo. Este impacto es doblemente duro para los países exportadores de petróleo, ya que ahora se enfrentan a tensiones agravadas en su salud fiscal. Según un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) citado por la OCDE, se espera que el crecimiento del PIB de todas las economías de MENA (excepto Egipto) disminuya en un promedio de -4,1%, con los países exportadores de petróleo cayendo a -6,6% y los países importadores de petróleo a -1% (OCDE, 2020c, p. 9). Otros sectores clave, como el turismo, también se ven afectados. Se prevé que la región podría perder unos 42.000 millones de dólares para 2020 (OCDE, 2020c, p. 3).

Europa

Los estados europeos no quedaron exentos del impacto económico de la pandemia. El FMI estima que el PIB de Europa se contraerá un 7% en 2020, el mayor descenso desde la Segunda Guerra Mundial (FMI, 2020b).

Los planes de mantenimiento del empleo en toda Europa han conservado al menos 54 millones de puestos de trabajo, minimizando de alguna manera las consecuencias económicas y sociales de la pandemia. Se prevé que el PIB de Albania se contraiga del 2,2% en 2019 al -7,5% en 2020. El empleo se redujo



Photo by Milliani Idriss from Pexels


un 3,6% interanual, mientras que el desempleo aumentó al 11,9%. Se prevé que la deuda pública de Albania aumente hasta un estimado 81,4% del PIB en 2020 (Banco Mundial, 2020c). Se prevé que el PIB de Armenia se contraiga del 7,6% en 2019 al -4,5% en 2020. La desaceleración económica fue impulsada por una contracción del 9% en el consumo privado y del 31% en la inversión durante el primer semestre de 2020. Se espera que la contracción del PIB y el aumento del déficit presupuestario aumenten la deuda pública hasta el 63% del PIB en 2020 (Banco Mundial, 2020d).


Se calcula que el PIB de Bulgaria se contraiga del 3,4% en 2019 al -4,0% en 2020. El país está menos expuesto a las cadenas de valor mundiales que otros países de la UE y, por tanto, el impacto económico no es tan grave como el de otros países europeos. No obstante, el desempleo medio aumentará hasta el 6% interanual, mientras que la deuda pública aumentará hasta el 27,7% del PIB en 2020 (Banco Mundial, 2020e). Tabla 1 compara los PIB de 2019 y los previstos para 2020 de los países que forman parte de esta síntesis global.





TABLA 1


Comparación del PIB de 2019 y 2020 (variación porcentual anual) de los países incluidos en el informe de síntesis global

 África	PAÍSES	PIB 2019	PROYECCIÓN PIB POS-COVID-19
	Gabón	3.4%	-2.7%
	Kenia	5.7%	1.0%
	Nigeria	2.0%	-4.30%
	Zimbabue	-8.1%	-10.4%
	Camerún	4.0%	-2.8%

 Asia	PAÍSES	PIB 2019	PROYECCIÓN PIB POS-COVID-19
	Sur de Asia	4.3%	-6.8%
	Sureste	4.4%	-3.8%
	Asiático India	4.2%	-9.0%
	Indonesia	5.0%	-1.0%
	Kirguistán	4.5%	-10%
	Filipinas	6.0%	-7.3%
	Tailandia	2.4%	-8.0%
	Hong Kong	-1.2%	-6.5%
	Afganistán	3.0%	-5.0%

 Europa	PAÍSES	PIB 2019	PROYECCIÓN PIB POS-COVID-19
	Albania	2.2%	-7.5%
	Armenia	7.6%	-4.5%
	Bulgaria	3.4%	-4.0%

 América Latina y el Caribe (LAC)	PAÍSES	PIB 2019	PROYECCIÓN PIB POS-COVID-19
	LAC	0.0%	-8.0%
	Argentina	-2.10%	-11.8%
	Bolivia	2.2%	-7.9%
	El Salvador	2.4%	-9.0%
	Guatemala	3.8%	-2.0%
	Honduras	2.7%	-6.6%
	Mexico	-0.30%	-9.0%
	Nicaragua	-3.9	-5.5%
	Peru	2.20%	-13.9%
	Venezuela	-3.9%	-25.0%
	Ecuador	0.1%	-11.0%

 Oriente Medio y Norte de África (MENA)	PAÍSES	PIB 2019	PROYECCIÓN PIB POS-COVID-19
	Algeria	0.8%	-5.5%
	Iraq	4.4%	-12.1%
	Lebanon	-5.6%	-25.0%
	Yemen	0.8%	-5.0%
	Egypt	5.6%	3.5%

Fuente: Datos recopilados de la base de datos del Banco Asiático de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial



Impacto sobre los sectores marginados y vulnerables

La pandemia ha afectado a todo el mundo, pero los impactos se han sentido de forma desigual: los sectores más pobres, marginados y vulnerables de la población son los que peor lo están pasando.

Mujeres y niños

COVID-19 ha empeorado de forma desproporcionada las condiciones de las mujeres y los niños. De los 96 millones de personas que se verán abocadas a la pobreza extrema, 47 millones son mujeres y niñas. Esto eleva las cifras absolutas de mujeres y niñas en situación

de pobreza extrema a 435 millones (ONU Mujeres, 2020a). El impacto social de la pandemia sobre las mujeres y las niñas también se ha manifestado en la carga adicional de trabajo de cuidados no remunerado. Antes de la pandemia las mujeres dedicaban 4,1 horas al día al trabajo de cuidados no remunerado, frente a las 1,7 horas diarias de los hombres (ONU Mujeres, 2020b). Se prevé que esta cifra aumente, especialmente a medida que varias actividades pasen a entornos virtuales, añadiendo nuevas dimensiones de trabajo de cuidados a las mujeres.

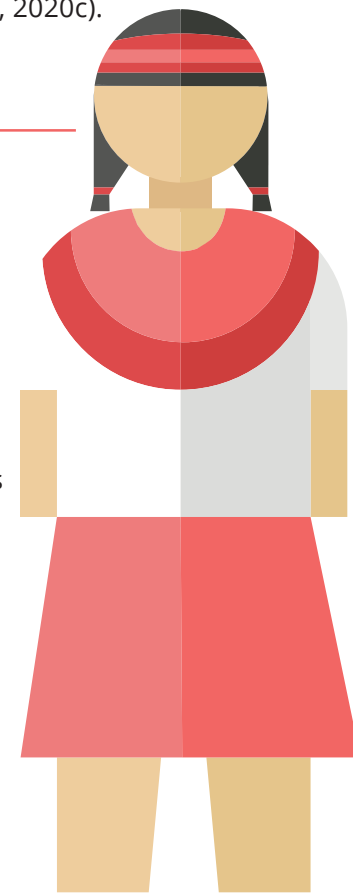
Los casos de violencia de género (VG) han aumentado drásticamente con las órdenes de permanencia en el hogar dictadas por la mayoría de los gobiernos del mundo. En los países que cuentan con mecanismos de denuncia,

se ha registrado un aumento del 25% en los casos de violencia de género. Es angustioso pensar en las implicaciones para las mujeres que ni siquiera tienen acceso a las líneas telefónicas de ayuda o los países que no cuentan con sistemas de denuncia.

La pandemia también ha complicado el acceso a los servicios sanitarios, ya que se han desviado recursos y personal hospitalarios cruciales de los servicios para atender la violencia de género, la atención al parto y la maternidad, y otras necesidades sanitarias. El desvío de recursos y personal puede dar lugar a un empeoramiento del estado de salud de las mujeres y las niñas y en mayores tasas de mortalidad (ONU Mujeres, 2020c).

Pueblos indígenas

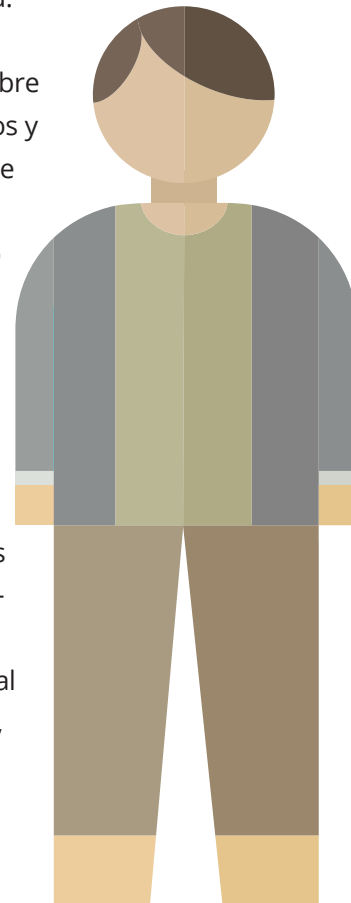
COVID-19 y las medidas relacionadas con ella han agravado la ya desfavorecida situación de los Pueblos Indígenas a nivel mundial. Los Pueblos Indígenas han sido objeto de amenazas de despojo de tierras, agresiones al desarrollo y saqueo de recursos. También son los menos prioritarios en términos de servicios sociales y económicos y de verdaderos esfuerzos de desarrollo por parte del Estado; por lo tanto, tienen menos acceso a los recursos y a servicios fiables, eficaces y adecuados de salud, saneamiento y educación.





Esta marginación sistémica y arraigada hace más difícil para los pueblos indígenas hacer frente al impacto de la propia pandemia y a las diversas medidas impuestas por los gobiernos. La mayoría de los pueblos indígenas trabajan en economías informales o en el sector rural/ agrícola, que paga el jornal y, por tanto, cualquier reducción de la jornada laboral dificulta su capacidad de obtener ingresos. Las restricciones a la movilidad también limitan sus posibilidades de vender sus productos y comprar artículos de primera necesidad y medicamentos. Muchas comunidades indígenas están situadas lejos de los centros médicos y muchos PI no pueden permitirse el coste de la asistencia sanitaria.

El acceso a los datos relacionados con COVID-19 sobre los pueblos indígenas ha sido difícil porque los datos y las pruebas anecdóticas de los diferentes centros de información no están agregados. Muchos países carecen de datos desglosados a nivel nacional pero los informes preliminares muestran el impacto devastador. Brasil, uno de los países más afectados del mundo, ha registrado una alta tasa de infección y muerte entre los pueblos indígenas, con 27.000 infectados y una tasa de mortalidad del 3% (Charlier y Varison, 2020). El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas señaló los alarmantes niveles de transmisión entre las comunidades indígenas y tasas de mortalidad a veces más elevadas (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2020). En África, LAC y Asia,



los pueblos indígenas fuera de las zonas urbanas pueden no tener acceso a las pruebas.

Pobreza urbana y asentamientos informales

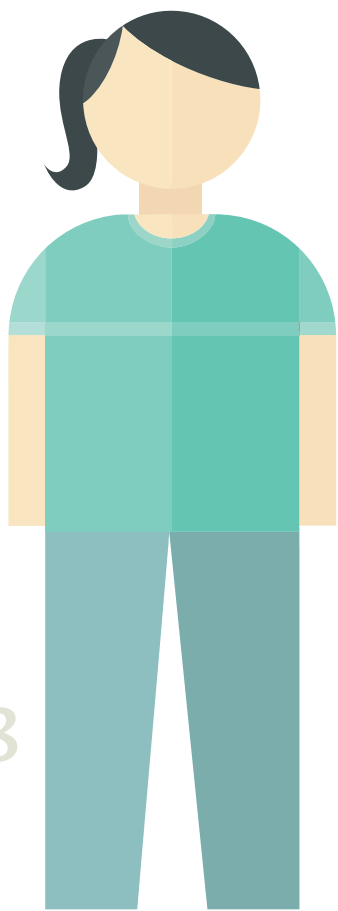
Al menos cuatro (4) mil millones de personas viven en zonas urbanas en todo el mundo, de las cuales al menos mil millones viven en barrios marginales o asentamientos informales. Estos asentamientos se caracterizan por unas condiciones de vida precarias, como viviendas inadecuadas y peligrosas, tenencia insegura y materiales de vivienda de baja calidad en terrenos urbanos compactados. Las condiciones de vida en los barrios marginales contribuyen a la propagación de enfermedades y esto se exagera en el caso de COVID-19 debido a: a) el hacinamiento; b) el acceso limitado a los servicios básicos; c) la dependencia de servicios de transporte abarrotados y d) la dependencia de la economía informal (Baker, Cira y Lall, 2020). Las medidas preventivas, como el distanciamiento social, el aislamiento de los casos positivos y el lavado regular de las manos, son difíciles en estos asentamientos debido a la falta de espacios y de acceso a las instalaciones sanitarias básicas (Friesen y Pelz, 2020).

A pesar de la pandemia, las comunidades informales se ven continuamente amenazadas por los desalojos. En Kenia, por ejemplo, 5.000 colonos informales fueron desalojados (Bhalla, 2020). En la India, en



septiembre se desalojaron 48.000 asentamientos precarios, que podrían aumentar a 250.000 viviendas según la última orden del Tribunal Supremo. En Filipinas, al menos 10.000 familias de Manila están amenazadas por la demolición (Beltran, 2020). Estos desalojos pueden contribuir a la propagación del virus COVID-19, ya que crearán una crisis humanitaria de familias hacinadas en viviendas temporales mientras se trasladan a un nuevo emplazamiento.

Juventud



La pandemia del COVID-19 ha generado profundos cambios sociales que tienen enormes repercusiones en los jóvenes, especialmente en su educación, empleo y salud mental. Según la UNESCO, al menos 1.500 millones de estudiantes y 63 millones de profesores de primaria y secundaria se han visto afectados por el cierre de escuelas. La mitad de estos estudiantes (830 millones) no tenían acceso a ordenadores y 40% no tenía acceso a Internet (UNESCO, 2020). Esta brecha digital se agranda cuando se observan los datos de los países en desarrollo. El mismo informe muestra que, en el África subsahariana, el 89% de los estudiantes no tiene acceso a ordenadores domésticos y el 82% no tiene acceso a Internet. En una encuesta de la OIT, el 65% de sus encuestados afirmó que están aprendiendo menos desde el comienzo de la pandemia, mientras que el 51% compartió que su escolarización se retrasará (OIT, 2020e).



Photo by Slondotpics from Pexels

En términos de empleo, la encuesta de la OIT muestra que el 17% de los jóvenes empleados antes de la pandemia dejaron de trabajar (OIT, 2020e). El mismo informe señala que los jóvenes de los países con menores ingresos son vulnerables a la reducción de las horas de trabajo y a la pérdida de ingresos. En cuanto a la salud mental, el 17% de los jóvenes están probablemente (énfasis de la OIT) afectados por la ansiedad y la depresión. Esto es variado, ya que las mujeres jóvenes y los jóvenes de entre 18 y 24 años declaran tener un bienestar mental más bajo, mientras que aquellos cuya educación o trabajo se detuvo debido a la pandemia tienen el doble de probabilidades de verse afectados por la ansiedad y la depresión que aquellos cuya educación o trabajo sigue en marcha (OIT, 2020e).

Como nota positiva, el mismo estudio señala que los jóvenes están haciendo su parte en la respuesta a la pandemia, ya que el 31% declara que participa en el voluntariado y el 27% declara que ha hecho donaciones para la respuesta a la COVID-19 (OIT, 2020e).



Medidas económicas y de protección social para minimizar el impacto

Varios gobiernos nacionales han puesto en marcha diversas formas de medidas de apoyo a quienes han perdido o reducido sus ingresos. Sin embargo, estas medidas son sólo temporales, tienen un alcance limitado y han excluido en gran medida a los trabajadores de la economía informal.

En Asia, algunas medidas de apoyo a los ingresos se orientaron a la concesión de préstamos a las empresas afectadas por la pandemia. En Filipinas, las partidas urgentes financiadas con préstamos del gobierno forman parte de un paquete más amplio de apoyo a las empresas. Las empresas privadas pueden beneficiarse de ayudas financieras en forma de aplazamientos de impuestos, préstamos a bajo interés y planes de garantía de créditos. (Guzmán, 2020). El gobierno proporcionó un pequeño subsidio en efectivo llamado Programa de Mejora Social para los trabajadores afectados por la pandemia. Sin embargo, había numerosas cláusulas sobre la elegibilidad que excluían a los hogares que todavía tenían un miembro empleado. En la India, millones de trabajadores informales corren el riesgo de quedar excluidos de los regímenes de asistencia social diseñados principalmente para los trabajadores formales. Los que tienen un historial laboral inestable o corto, los autónomos y otros trabajadores atípicos suelen estar poco o nada protegidos.

En África, algunos países han aplicado enfoques sólidos para proporcionar protección social a los afectados por la pandemia. En Kenia, el gobierno reasignó 9,5 millones de dólares del fondo de la Cobertura Sanitaria Universal y los utilizó para la contratación de

nuevos trabajadores sanitarios. En cuanto a las ayudas a las empresas, el gobierno proporcionó una reducción de impuestos del 100% a los kenianos que ganan 228 dólares o menos. También redujo el IVA del 16% al 14% y el tipo del impuesto sobre el volumen de negocios del 3% al 1% para todas las MIPYMES. El gobierno también proporcionó un paquete de 5 millones de dólares para amortiguar el impacto de la pandemia en el sector turístico. El gobierno también proporcionó 95 millones de dólares a grupos vulnerables, como ancianos y huérfanos, entre otros. En Nigeria, el gobierno introdujo una transferencia de efectivo de 20.000 nairas (52,63 dólares) a 2,6 millones de los más pobres del país, inscritos en el programa de Transferencia Condicionada de Efectivo. En Gabón, la ayuda se extendió a los empleados y propietarios de MIPYMES, aunque el informe del caso señala que existe un posible conflicto de intereses porque muchos funcionarios del gobierno son propietarios de MIPYMES. Los empleados amparados por la Orden n° 0052 /MEFPTFPDS recibieron un subsidio del 50% al 70% del salario bruto mensual. Sin embargo, esto representa una pérdida de entre el 30% y el 50% de sus ingresos brutos mensuales, sin incluir las primas y los subsidios que no se pagan. La economía informal de Gabón no se benefició de los regímenes de protección, ya que muchos requisitos exigían documentación.

En Europa, los gobiernos de los países incluidos en este informe desarrollaron paquetes fiscales, aunque no hay datos concluyentes sobre cómo se desembolsaron estos fondos. En Albania, el gobierno desarrolló tres paquetes financieros de un tamaño combinado de 45 mil millones de leks (aproximadamente 45 millones de dólares). El primer paquete financiero consistía en una garantía soberana de hasta 10.000 millones de ALL (aprox. 100 millones de dólares) para las empresas que tuvieran dificultades para pagar los salarios y 6.500



millones de ALL (aprox. 65 millones de dólares) para los sectores más necesitados de la población, las pequeñas empresas y para el posible desempleo debido a la COVID-19. Un segundo paquete financiero fue diseñado para impulsar sectores económicos como el turismo, las empresas manufactureras y la industria de la moda. Este paquete incluía ayudas para los empleados afectados por los despidos y el desempleo.

Por último, el tercer paquete se dirigía al sector del transporte público. En Armenia, el paquete de ayudas se centró principalmente en el apoyo a las empresas y al empleo mediante préstamos y subvenciones. El componente de protección social pretendía abordar los problemas socioeconómicos de los grupos vulnerables que se encontraban en situaciones difíciles. Por último, el gobierno proporcionó ayuda financiera a los empleados que trabajaban en sectores específicos como el turismo, los servicios hoteleros y la educación.

Las estrategias de apoyo social en la región MENA son variadas, debido a las diferentes circunstancias de los países de la región. En Argelia, el apoyo ha llegado en forma de reasignación presupuestaria hacia los servicios sanitarios y la respuesta a la pandemia.

El gobierno también puso en marcha planes de apoyo a los trabajadores, como el aumento del salario mínimo de 18 mil dinares (135 dólares) a 20 mil dinares (150 dólares) y la suspensión del impuesto sobre los ingresos mensuales iguales o inferiores a 30.000 dinares (238 dólares). Además, el gobierno argelino ha seguido concediendo subvenciones a los bienes de consumo por valor de 14.000 millones de dólares. En Irak, no hay datos concluyentes que demuestren que se prestaron servicios sociales a los ciudadanos. El informe del caso

señala que la débil posición fiscal del país y el limitado endeudamiento externo pueden haber afectado a la financiación de los servicios sociales en la época de la pandemia. En Yemen, tampoco hay datos concluyentes sobre los servicios sociales. En el informe se señala que los años de guerra civil han afectado a la infraestructura logística y a la capacidad burocrática para prestar servicios sociales. Además, la pandemia ha afectado a las remesas de los yemeníes. Las tasas de tránsito en Sanaa (la capital de Yemen) también han disminuido, lo que ha hecho que las reservas fiscales sean mínimas.

En LAC, las diferencias en las estructuras gubernamentales se traducen en diferencias en las medidas de apoyo social durante la pandemia. En Argentina, el gobierno proporcionó un paquete de financiación con un alto porcentaje de fondos dirigidos a sectores con restricciones de ingresos a través del Ingreso Familiar de Emergencia. El presupuesto también priorizó el fortalecimiento del sistema de salud a través de la construcción de 12 hospitales modulares y el fortalecimiento de los instrumentos de los servicios de salud para la atención primaria y la detección temprana del COVID-19. En México, el gobierno emprendió medidas de austeridad que se tradujeron en la disolución de varias dependencias gubernamentales y en una reducción del 75% del presupuesto de todas las secretarías (ministerios). El gobierno implementó apoyos económicos a través de subsidios y programas sociales. Sin embargo, es demasiado pronto para saber si estos programas han tenido un impacto a nivel comunitario. En Nicaragua, la Unión Europea (UE) ha redirigido más de 38 millones de dólares para proporcionar al país recursos inmediatos para hacer frente a la pandemia. Este fondo incluye lo siguiente: apoyo a los trabajadores de microempresas con dificultades económicas, y salud y educación en grupos vulnerables.



Otros países de la región han mostrado unos resultados pésimos en sus esquemas de protección social. Por ejemplo, en Honduras, el gobierno se comprometió a crear un Fondo de Garantía de 300.000 libras (lempiras hondureñas) (unos 12.450 dólares) para las MIPYMES; sin embargo, el sector empresarial aún no tiene acceso a él. En abril, el gobierno autorizó fondos para garantizar la soberanía y seguridad alimentaria pero estos recursos quedaron en manos de las grandes empresas del sector alimentario y no llegaron a los pequeños productores, campesinos e indígenas. En Guatemala, el gobierno promovió 10 programas sociales financiados con un préstamo de 37.000 millones de quetzales (5.030 millones de dólares). Entre estos programas sociales se encuentran el Programa Bono Familia y el de Agricultura Campesina y Protección del Empleo.

Hasta agosto, estos programas mostraban niveles diferenciados de implementación y avance, que oscilaban entre el 9% y el 40%, lo que refleja su ineficacia, ineficiencia y falta de transparencia. Mientras tanto, la situación en El Salvador es sombría, ya que no se conoce una estrategia gubernamental para hacer frente a la pandemia, y el gobierno recurre a improvisaciones en el camino.

A la desigual o incluso débil aplicación de las políticas de protección social entre las economías en desarrollo se suman las deficiencias estructurales, en particular el servicio de la deuda. Aun así, algunas de las políticas de protección social se financian con deudas adicionales de instituciones financieras internacionales (IFI) como el Banco Mundial, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo y la UE. La carga de la deuda adicional en el contexto de una pandemia mundial es desventajosa para los países en desarrollo, ya que los ingresos nacionales se canalizan

hacia la financiación de la carga de la deuda, lo que deja a los servicios sociales nacionales, como los servicios de salud pública y de educación, sin fondos una vez más.

Un entorno inhabilitante para la población y las OSC

La pandemia de COVID-19 tuvo un profundo impacto en los derechos humanos y el espacio democrático. Mientras que otros países, como Taiwán y Corea del Sur, pudieron evitar medidas de contención drásticas como los cierres, la mayoría de los países aplicaron algún grado de cierre nacional y/o localizado para contener el virus. Los cierres exigían el máximo grado de cumplimiento por parte de la población, lo que a su vez llevó a un alto grado de dependencia del poder policial para garantizar el cumplimiento. En algunos países, los Estados favorecieron el recurso a la fuerza policial excesiva en lugar de la puesta en marcha de soluciones médicas integrales como respuesta principal a la pandemia. En consecuencia, muchos Estados han utilizado la pandemia del COVID-19 para atacar los derechos humanos y las libertades constitucionales, como las libertades de circulación, asociación y organización. La pandemia también se ha utilizado para restringir y cerrar aún más los espacios cívicos. Estos ataques a los derechos y espacios democráticos limitan los sistemas y mecanismos de promoción de los principios de la CED en la respuesta a la pandemia. La respuesta a la pandemia del COVID-19 ha erosionado el espacio en el que operan las OSC, ha socavado la posición de las OSC como actores independientes por derecho propio y como socios del desarrollo y,



en muchos casos, ha reprimido abiertamente las voces de las OSC, especialmente las que critican a sus gobiernos en muchos países.

Libertad de movimiento

Los gobiernos del sudeste asiático aplicaron diversas formas de cuarentena comunitaria o restricciones de movimiento para frenar la circulación de personas. Desgraciadamente, la policía y el ejército de varios países se han mostrado demasiado impacientes por detener a las personas que infringían los protocolos de cuarentena. Durante el bloqueo aplicado en la India entre marzo y abril de 2020, el gobierno registró 60.000 violaciones, y los infractores de la cuarentena fueron sometidos regularmente a abusos físicos por parte de la policía india, como palizas en público. Los periodistas informaron de que se registraron al menos 27 muertes durante la primera semana del bloqueo debido a las palizas de la policía. En Filipinas, la oficina de medios de comunicación del gobierno informó de que al menos 130.000 personas han sido detenidas desde que se aplicó la cuarentena comunitaria en todo el país en marzo de 2020 (Caliwan, 2020).

Libertad de información

Varios países han introducido y aplicado normativas para controlar la difusión de información sobre las medidas de COVID-19. Estas regulaciones van desde acciones más mundanas, como la restricción del acceso de la prensa a las sesiones informativas oficiales de los organismos gubernamentales, hasta la introducción de leyes que pretenden reprimir las noticias no oficiales relacionadas

con el COVID-19. Mientras que los gobiernos han recurrido al control de la información y de la prensa para frenar las "noticias falsas" que podrían inducir al pánico masivo, varios grupos de periodistas han acusado a los gobiernos de utilizar la pandemia del COVID-19 como pretexto para cerrar el periodismo (Shahbaz y Funk, 2020).

Según los datos publicados por el Instituto Internacional de Prensa, un grupo internacional de defensa de los medios de comunicación, las violaciones de la libertad de prensa se clasifican de la siguiente manera: detenciones/cargos, restricciones al acceso a la información, censura, regulación excesiva de las noticias falsas y agresiones verbales/físicas. Hasta la fecha, se han registrado 418 violaciones de la libertad de prensa: 185 detenciones/cargos, 56 restricciones a la información, 57 incidentes de censura, 15 incidentes de regulación excesiva de noticias falsas y 100 casos de ataques verbales/físicos (Instituto Internacional de la Prensa, 2020). Asia y el Pacífico lideran las cifras de detenciones/cargos, restricciones a la información y regulación excesiva de noticias falsas. Por su parte, Europa lidera los incidentes de censura, mientras que Asia, el Pacífico y África presentan el mayor número de casos de agresiones verbales/físicas.

Violencia de género

La violencia de género es una preocupación acuciante en medio de la pandemia del COVID-19 (ONU Mujeres, 2020). Como las normas de cuarentena restringen a las personas dentro de sus hogares, la violencia de género ha aumentado de forma alarmante debido a la



mayor proximidad e interacción entre las mujeres y las niñas con sus agresores. En varios países africanos, los expertos señalaron que había un aumento de varios indicadores relacionados con la violencia de género, como la violencia conyugal, la violencia entre propietarios e inquilinos, la violencia en el vecindario, el abuso entre padres e hijos, el abuso en las relaciones y el abuso entre policías y ciudadanos. Varios informes también señalan que se ha producido un rápido aumento de las llamadas de socorro. Nigeria, por ejemplo, informó de que se había triplicado el número de llamadas de socorro a las líneas directas de violencia de género/sexual, mientras que Kenia informó de que se habían multiplicado por diez las llamadas a sus líneas directas de socorro.

También se han registrado incidentes de violencia de género cometidos por personas de autoridad (por ejemplo, policías, guardias, autoridades de centros de cuarentena). En Nigeria, una mujer de 23 años fue detenida por la policía por no llevar mascarilla. Fue violada mientras estaba detenida (Obaji, 2020). La introducción de numerosos centros de cuarentena y reglamentos ha expuesto a mujeres y niños a nuevas formas de abuso a medida que se introducen nuevos espacios de encarcelamiento. En Kenia se denunció un incidente similar en el que una mujer fue violada por un guardia de uno de los centros de cuarentena del país (Reuters, 2020). Estos incidentes ponen de manifiesto la necesidad de dar una respuesta más adecuada al género en los centros de cuarentena para proteger a los grupos vulnerables.



Cómo COVID-19 ha afectado a las tendencias de la AOD

A medida que la pandemia de COVID-19 se extiende por los países en desarrollo, es necesario mantener y, si es posible, aumentar la cantidad y la calidad de la AOD. A medida que los países en desarrollo ven cómo se reduce su base de ingresos nacionales debido a la obstaculización de la actividad económica, la AOD proporciona un apoyo crucial para aumentar las finanzas nacionales y permitir a estos países financiar las medidas de salud pública y el apoyo económico a los trabajadores desplazados.



¿Una carga para la financiación del desarrollo?

La pandemia de COVID-19 amenaza la AOD a los países en desarrollo, ya que los países desarrollados miran hacia dentro para apuntalar sus economías. Al comienzo de la pandemia, el CAD de la OCDE ya señaló la necesidad de "proteger" la AOD para financiar las necesidades de desarrollo de los países en desarrollo (OCDE, 2020d). Estas necesidades incluyen la lucha contra el hambre, la creación o mejora de la protección social y la mejora de la salud pública, que son cruciales durante crisis como la de COVID-19. Un estudio sobre los primeros efectos de la pandemia en la AOD (Breed y Sternberg, 2020) reveló que los compromisos de ayuda bilateral comunicados a la Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda (IATI) en los primeros cinco meses de 2020 (16.900 millones de dólares) son inferiores a lo previsto y un tercio menos que los del mismo periodo de 2019 (23.900 millones de dólares).

El impacto de la pandemia en la ayuda al desarrollo es preocupante, ya que al ser anterior a la COVID-19, la AOD a los países en desarrollo sigue estando muy por debajo del compromiso del 0,7% de la Renta Nacional Bruta (RNB). En 2019, la AOD aumentó un 1,4% en términos reales, una cantidad equivalente a 152.800 millones de dólares. Sin embargo, a pesar de este aumento neto, todavía queda un largo camino para que los países de la OCDE cumplan sus compromisos de AOD. El total de la AOD en 2019 fue equivalente al 0,30% de la RNB combinada de los países del CAD, por debajo del 0,31% del año anterior. Solo cinco (5) miembros del CAD pudieron

cumplir o superar el objetivo del 0,7%: Dinamarca, Luxemburgo, Noruega, Suecia y el Reino Unido (Van de Poel, 2020). Además, la ayuda en forma de préstamos, en lugar de subvenciones, aumentó un 5,7%, dejando a los países en desarrollo con compromisos de deuda adicionales (AOED, 2020b).

La pandemia ha puesto a prueba la financiación del desarrollo, con costes masivos dirigidos a las intervenciones humanitarias. Se calcula que las necesidades financieras del plan de respuesta humanitaria mundial para hacer frente a la crisis de COVID-19 ascienden a 2.010 millones de dólares (OCHA de la ONU, 2020). Los estrictos bloqueos impuestos a nivel mundial han obstaculizado la actividad económica, lo que ha provocado la contracción de las economías nacionales tanto de los gobiernos donantes como de los gobiernos receptores. Se espera que la recesión económica resultante en los países donantes afecte drásticamente a la asignación y el gasto de la AOD en hasta 25.000 millones de dólares para 2021 (Development Initiatives, 2020). Un informe de la OCDE ha mostrado que durante el segundo trimestre de 2020 se registró una contracción del 6,9% del PIB en las economías del G20, lo que puso a prueba la capacidad financiera de las grandes economías mundiales para dar prioridad a la ayuda al desarrollo.

Respuesta del CAD de la OCDE para hacer frente a la pandemia de COVID-19

La Declaración Conjunta del CAD-OCDE sobre la pandemia mundial de COVID-19 (abril de 2020) hizo hincapié en la necesidad de prote-





ger los compromisos de la AOD para frenar las posibles pérdidas de la pandemia, señalando que la pandemia de COVID-19 frenará los logros alcanzados por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (OCDE-CAD, 2020d). Esta Declaración reconoce la necesidad de dar prioridad a los Países Menos Adelantados (PMA) y a los países frágiles, para reducir la desigualdad y proteger los derechos humanos de los grupos vulnerables.

El CAD de la OCDE ha identificado específicamente las intervenciones de salud pública como formas clave para asignar y contabilizar la AOD. Estas intervenciones se definen en las siguientes áreas clave:

- 1) Inversión en los sistemas sanitarios de los países asociados, que abarca áreas como el apoyo a los hospitales, los laboratorios y las administraciones sanitarias;
- 2) intervenciones destinadas a controlar la propagación del COVID-19, como la información, la educación, la comunicación, la ampliación de las capacidades de análisis en los países en desarrollo, la investigación y el desarrollo de vacunas, el tratamiento y la atención a los pacientes; y por último
- 3) la respuesta humanitaria para mitigar el impacto del COVID-19, especialmente para los medios de vida y la seguridad de las poblaciones vulnerables, como las mujeres, los niños y los ancianos (OCDE-CAD, 2020e).





Photo by Anna Shvets from Pexels



A pesar de la disminución de los compromisos de AOD por parte de los donantes bilaterales, los compromisos de AOD por parte de las FI y los donantes multilaterales aumentaron en enero-julio de 2020 en comparación con el mismo periodo del año anterior (véase el gráfico 2). Además de el aumento de los compromisos de la AOD multilateral, también hubo un marcado aumento de otros flujos oficiales (OFO) canalizados a través de las IFI y las instituciones multilaterales para 2020 en comparación con los años anteriores. Si bien se trata de una evolución positiva para abordar las necesidades urgentes de financiación para la respuesta a la COVID-19, los actores de las OSC instan a una mayor inclusión de los actores y las asociaciones de la sociedad civil en las IFI e instituciones multilaterales para mejorar los principios de la CED (Villota y Cassanova, 2020).

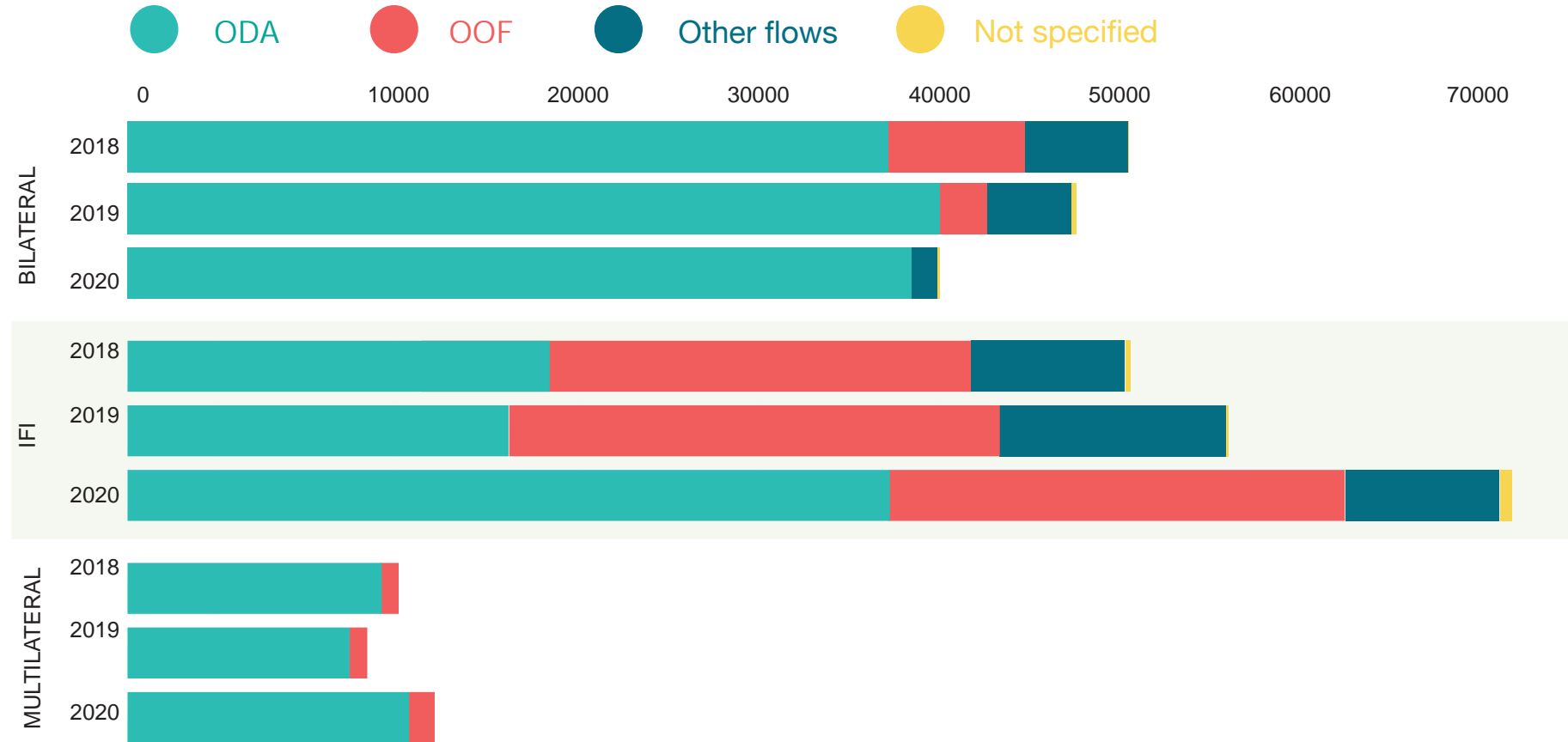
En términos de asignación de sectores, la mayor asignación para 2020 tanto en las IFI como en los donantes bilaterales es la infraestructura social. En el caso de las IFI, la segunda asignación más alta es para la infraestructura económica, mientras que en el caso de los donantes bilaterales es para gobernanza, paz y seguridad. Para 2020, hay una mayor asignación de las IFI en todos los sectores en comparación con los donantes (véase el gráfico 3).

Mientras tanto, en términos de prioridad regional, África subsahariana y el sur de Asia, respectivamente, representan la mayor parte del compromiso de financiación de los donantes multilaterales FMI y Banco Mundial (véase la tabla 2).



GRÁFICO 2

Compromisos de ayuda de los principales donantes bilaterales, IFI e instituciones multilaterales, 2018-2020 (de enero a julio) en millones de dólares



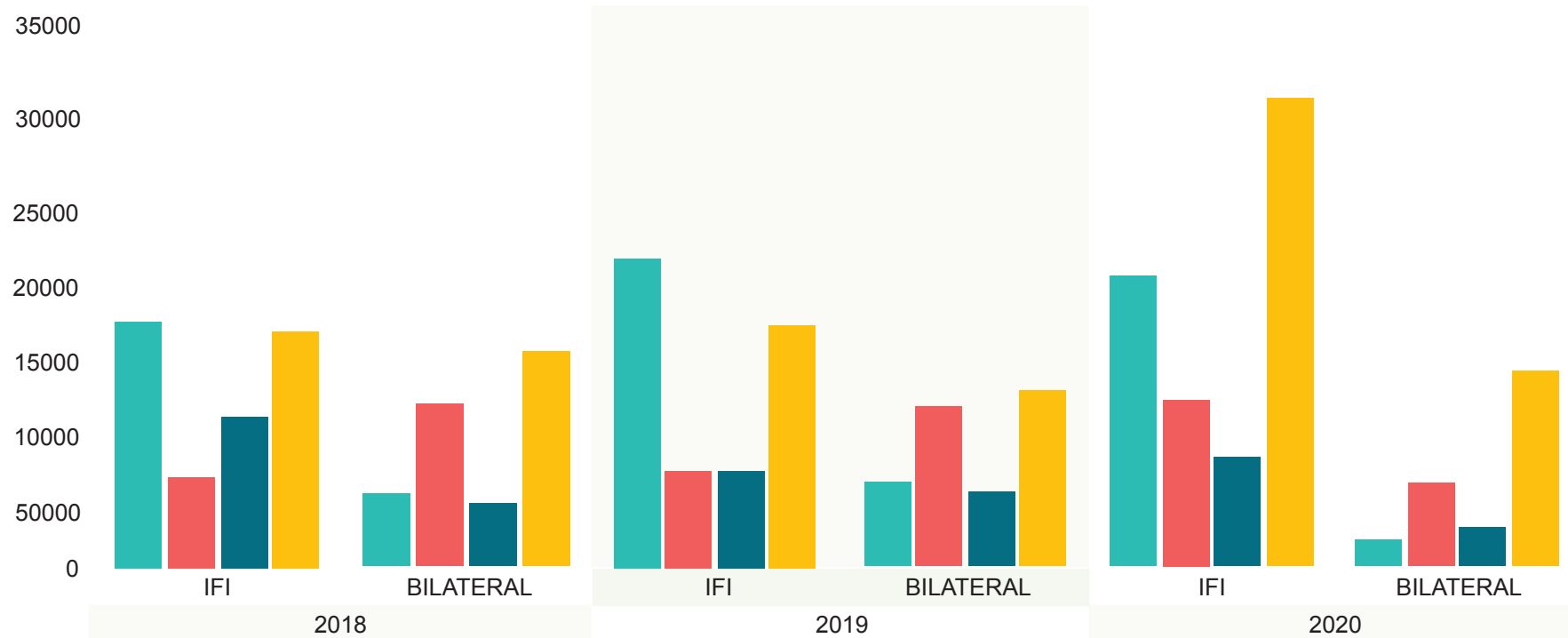
Fuente: Development Initiatives. (2020b). "Tracking Aid Flows" (*Seguimiento de los flujos de ayuda*)
IFI = Institución Financiera Internacional; OOF = Otros Flujos Oficiales



GRÁFICO 3

Asignación sectorial de la ayuda, 2018-2020

● Infraestructura económica ● Gobernanza, paz y seguridad ● Producción ● Infraestructura social



Fuente: Development Initiatives. (2020b). "Tracking Aid Flows"



COVID-19 Áreas prioritarias de los países donantes

Los gobiernos donantes, las IFI, la comunidad internacional de desarrollo y las OSC han movilizado recursos, experiencia y activos organizativos para hacer frente a los impactos de la COVID-19. Hasta octubre de 2020, se han comprometido un total de US\$20 billones para hacer frente a los daños económicos, sociales y de salud pública causados por la pandemia.

Mientras se publican estos informes, los informes de las OSC han destacado la incertidumbre de si se trata de nuevos fondos o de reajustes de partidas presupuestadas anteriormente. CONCORD-Aidwatch ha afirmado que sólo los grandes donantes, como Francia, Alemania y el Reino Unido, han movilizado recursos adicionales para la respuesta a la pandemia (Villota y Cassanova, 2020). La siguiente tabla muestra los datos del compromiso de los donantes por región:

TABLA 2

Importe estimado y porcentaje de compromiso de financiación para la respuesta de COVID-19 para 2020

REGIÓN	FMI (45 PAÍSES DESDE 24 DE ABRIL)		BANCO MUNDIAL (63 PAÍSES DESDE 27 DE ABRIL)	
	US\$ (MILLÓN)	% COMPROMISO	US\$ (MILLÓN)	% COMPROMISO
Asia Oriental y Pacífico	22	0.02	755	0.47
Europa y Asia Central	1,167	1.17	770	0.48
Latinoamérica y el Caribe	1,627	0.90	734	0.46
El Oriente Medio y Norte de África	765	0.77	361	0.23
Sur de Asia	1,422	1.42	1575	0.98
África subsahariana	4,306	4.31	466	0.29
No asignado	90,691	90.69	145,338	97.09

Fuente: Raga y te Velde (2020)



Photo by Brett Sayles from Pexels

Evidenciando eficacia en la respuesta a COVID-19



Además de ser una crisis de salud pública la pandemia de COVID-19 es también una crisis de desarrollo internacional, con graves consecuencias para la consecución de los objetivos de desarrollo y la cooperación internacional. Incluso antes de que la pandemia llegara, los países ya estaban atrasados en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030. Mientras los países desarrollados abordan los impactos del COVID-19 a nivel nacional, la Asamblea General de las Naciones Unidas (2020) pidió una mayor cooperación multilateral para abordar las múltiples crisis que ha puesto de manifiesto la pandemia.



La AOD es una de las principales fuentes de respuesta de los países en desarrollo. Mientras que los antiguos fondos se han reajustado y los nuevos fondos llegan de los donantes a los países receptores, estos fondos deben adherirse a los principios de eficacia del desarrollo. La CED es un marco de desarrollo internacional que sitúa las necesidades de las personas en primer lugar, en lugar de los intereses corporativos y geopolíticos de los países donantes. La CED tiene cuatro principios fundamentales: apropiación por parte de los países, enfoque en resultados, alianzas inclusivas; y transparencia y rendición de cuentas mutua. La AOED ha destacado la importancia de defender los cuatro principios de la CED junto con el principio de "no dejar a nadie atrás" para orientar las medidas de los gobiernos en la lucha contra la pandemia de COVID-19 (AOED, 2020).

Principios de CED en tiempos de COVID-19

1. Apropiación por parte de los países

Todos los actores deben basarse en los sistemas y prioridades de los países en desarrollo para dar una respuesta eficaz y sostenible a la pandemia de COVID-19. La AGCED señala que "debe invertirse la tendencia a la baja de la alineación de los socios de desarrollo con las prioridades, los planes y el marco de resultados de los países socios" (GPEDC, 2020). Para la AOED (2020), la apropiación por parte de los países debe cumplir las siguientes normas:

Impulsada por las prioridades nacionales y las realidades sobre el terreno. Es necesario que los donantes alineen sus planes con las realidades sobre el terreno para garantizar la consistencia y la coherencia de la respuesta de COVID-19 con las estrategias nacionales de desarrollo. Adherirse al principio de apropiación

también significa que las políticas y estrategias nacionales deben ser legítimas a ojos de otras partes interesadas.

Alineación y uso de los sistemas nacionales en la financiación de las respuestas de COVID-19. Es necesario que los donantes utilicen los sistemas de los países como opciones por defecto en lugar de las modalidades de proyectos, que pueden tardar más en llegar en el contexto de la pandemia. También es necesario acelerar el apoyo presupuestario para la ejecución general y sectorial

Previsibilidad: Financiación puntual y fiable. Es necesario minimizar la diferencia entre los compromisos de los donantes y los desembolsos reales de fondos.

Armonización: Coordinación de los donantes en la respuesta a COVID-19. Es necesaria la coordinación entre los donantes, los agentes nacionales y los agentes de las OSC para garantizar la eficacia en la prestación de los servicios y la ayuda que tanto necesitan las comunidades afectadas.

2. Alianzas inclusivas

Las alianzas inclusivas son necesarias para maximizar todas las contribuciones de los diferentes actores sobre el terreno. La AGCED señala que debería haber más alianzas inclusivas entre el gobierno y otras partes interesadas, como las OSC y los actores del sector privado, y que estos actores deberían estar capacitados para poder responder a las necesidades de sus comunidades. El documento de posición de la AOED señala que es importante fortalecer la participación de la sociedad civil en la respuesta a COVID-19, incluyendo la prestación de servicios, el monitoreo y la incidencia. El documento



de posición de la AOED señala que la respuesta a COVID-19 debe crear un entorno propicio que defienda las normas de derechos humanos, como la libertad de reunión y movilidad, el derecho a la privacidad y las oportunidades de participación, para que las OSC puedan responder eficazmente a la crisis de COVID-19.

3. Transparencia y rendición de cuentas

Es importante garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, especialmente en la dinámica de la respuesta a COVID-19. La siguiente lista de comprobación de la AOED garantiza la adopción de medidas factibles para cumplir este principio.

Disponibilidad de mecanismos de supervisión y reparación. Los mecanismos de rendición de cuentas son importantes para garantizar que los recursos asignados para hacer frente a la pandemia se utilicen adecuadamente y que no se cometan abusos por parte de las autoridades. Se anima a los actores del desarrollo a compartir la información oportuna para garantizar la transparencia y la responsabilidad en la respuesta a la pandemia. Los organismos de supervisión también deben integrar a los actores de la OSC en sus estructuras.

Claridad en la asignación y el desembolso de la financiación relacionada con COVID. La información sobre la asignación y el desembolso de COVID-19 debe ser oportuna, completa y desglosada para permitir una mejor evaluación de los recursos disponibles y las medidas probables.

4. Enfoque en los resultados

El principio de enfoque en los resultados tiene por objeto garantizar que la cooperación al desarrollo atienda las necesidades de los

más vulnerables. Deben existir marcos transparentes, medibles y con plazos para evaluar los avances y resultados.

5. No dejar a nadie atrás

El principio de "no dejar a nadie atrás" pretende abordar dos preocupaciones: acabar con la pobreza absoluta en todas sus formas y garantizar que los que se han quedado atrás puedan "alcanzar" a los que han experimentado un mayor progreso. Al mismo tiempo, el principio también pretende poner fin a la discriminación de grupos que se traduce en resultados desiguales para los sectores marginados de la población (ODI, 20171). La pandemia del COVID-19 amenaza con ampliar la brecha de la pobreza y la desigualdad. La AOED ha identificado los siguientes indicadores para incorporar el principio en la respuesta a la pandemia COVID-19.

Cumplir y/o superar los objetivos de ayuda. Es necesario que la comunidad internacional cumpla y/o supere el objetivo del 0,7% de la RNB para los compromisos de AOD. También es necesario garantizar un aumento de la calidad de la ayuda para que los Estados puedan responder eficazmente a los impactos a corto y largo plazo de la pandemia.

Acceso para los vulnerables y marginados. Las políticas nacionales de respuesta a COVID-19 deben garantizar el suministro de bienes y servicios de ayuda a las poblaciones vulnerables y marginadas, que incluyen, entre otros, a los migrantes, los refugiados, los pueblos indígenas, los campesinos, los trabajadores informales, etc. Estas respuestas deben ser sensibles al género y deben tener en cuenta los impactos específicos de la pandemia en las mujeres y las niñas.

Los derechos humanos en el centro de la respuesta a la pandemia. Las políticas y estrategias nacionales para la respuesta a



COVID-19 deben adoptar un enfoque basado en los derechos humanos (EBDH) para garantizar la protección y la promoción de los derechos y el bienestar de las poblaciones vulnerables y marginadas. Deben existir mecanismos de rendición de cuentas para garantizar que la respuesta a la pandemia sea coherente con las leyes y normas de derechos humanos.

Solidaridad: Más subvenciones en lugar de préstamos. La financiación de la ayuda y de las emergencias proporcionada a los países en desarrollo por los donantes debería venir en forma de subvenciones en lugar de préstamos para evitar una carga adicional de la deuda para los países en desarrollo. El servicio de la deuda y otras

formas de condicionalidad de los préstamos deberían eliminarse para proporcionar mayores recursos a los países en desarrollo para responder a la pandemia.

Adicionalidad: Fondos distintos y adicionales para la respuesta de COVID-19. La ayuda al desarrollo es un recurso indispensable utilizado para frenar la pobreza en los países en desarrollo, incluido el fortalecimiento de los sistemas sanitarios. Los donantes deben evitar desviar recursos de ayuda de sectores críticos como la salud en los países en desarrollo para apoyar el gasto en el país donante. La ayuda debe proporcionarse a los países necesitados para ayudarles en su respuesta a COVID-19. Estos recursos deben ser adicionales y distintos de la AOD.



Análisis de la eficacia de la respuesta al COVID-19

A. Sobre el principio de la apropiación

Según los informes de los países, la aplicación de la apropiación en las estrategias de COVID-19 es desigual en las distintas regiones. Aunque varios informes muestran que los planes nacionales de COVID-19 han incorporado las prioridades nacionales de desarrollo, existe un escaso nivel de coordinación entre los gobiernos nacionales y las OSC y otras partes interesadas. Los países y organismos donantes también han compartido que apoyan las estrategias de los gobiernos nacionales. Sin embargo, queda por ver si hay instrumentos políticos posteriores, como la aplicación de las condicionalidades de los préstamos, que puedan socavar la apropiación del país. Todavía no hay datos concluyentes en este punto.

REGIONES



Asia

En Asia, los casos de los países y los informes sectoriales sugieren que la aplicación de la apropiación varía en términos de alcance y amplitud. En un extremo está India, que no adoptó un plan estratégico nacional para la respuesta al COVID-19, pero impuso cierres y demarcó zonas de contención. En el otro extremo se encuentran

Filipinas y Kirguistán, que adoptaron planes estratégicos nacionales para hacer frente a la pandemia. Sin embargo, en ambos países se ha observado una limitada participación de las partes interesadas en el diseño, desarrollo e implementación de estos planes. Filipinas, que ha impuesto una de las cuarentenas más largas del mundo, ha llegado a dar una respuesta fuertemente militarista al COVID-19. Por otro lado, en Kirguistán se potenció la apropiación mediante el uso de sistemas nacionales por parte de los donantes multilaterales y bilaterales en la financiación de la respuesta al COVID-19, con cerca del 95 % de la ayuda extranjera recibida canalizada a través de apoyo presupuestario.



África

Los planes nacionales de Gabón, Kenia, Nigeria y Zimbabue se desarrollaron para concretar la estrategia gubernamental nacional de respuesta al COVID-19. Sin embargo, difieren en cuanto al grado de participación de las múltiples partes interesadas en el desarrollo y la aplicación de estos planes. Por ejemplo, Zimbabue se comprometió y consultó activamente con las organizaciones religiosas, otras OSC y las partes interesadas sobre la difusión de información y la planificación de la reapertura gradual de los lugares de culto. Aunque la elaboración del plan nacional de Kenia incorporó aportaciones de los socios internacionales para el desarrollo, no contó con la participación de las OSC y las partes interesadas locales, cuyo papel se limitó a asistir a los grupos de trabajo en la aplicación del plan nacional de contingencia. En el caso de Nigeria, la participación de las partes interesadas a nivel nacional es muy mínima, aunque su





presencia se observa en términos de su participación en los grupos de trabajo subnacionales. En Gabón, se ha observado la falta de participación de las OSC tanto en el desarrollo como en la aplicación del plan estratégico nacional.

Por otra parte, aunque los donantes bilaterales y multilaterales han concedido AOD, como materiales y equipos, subvenciones y préstamos a Nigeria, no hay pruebas suficientes de que los sistemas nacionales se hayan utilizado en la financiación de COVID. En Gabón, la ayuda se canaliza a través del Instrumento de Financiación Rápida (IFR) del FMI, que proporciona asistencia financiera rápida a todos los países miembros que se enfrentan a una balanza de pagos urgente. Sin embargo, parece que no hay coordinación entre los donantes y con el gobierno en cuanto a la financiación y la respuesta a COVID-19. Esto podría socavar la prestación efectiva de asistencia y servicios.



LAC

Varios países de LAC desarrollaron e implementaron estrategias nacionales para hacer frente a los impactos del COVID-19. En México, Honduras y Argentina se publicaron decretos presidenciales ya en febrero. Estos decretos dirigieron los desembolsos presupuestarios, las medidas de austeridad dentro del gobierno y los planes y acciones para la preparación y prevención de COVID. Las OSC argentinas consideran que la respuesta y la financiación del COVID-19 están generalmente armonizadas. El país asistió a las familias vulnerables de bajos ingresos y fortaleció el sector de la salud. Sin embargo, el inconveniente radica en la rendición de cuentas, la transparencia y la previsibilidad de los esfuerzos de

respuesta al COVID-19, incluyendo un lento desembolso del presupuesto. Por otra parte, El Salvador experimentó un estancamiento del poder entre el ejecutivo y el legislativo, por lo que no hubo un plan gubernamental consolidado para hacer frente a la pandemia. Por el contrario, el gobierno pasó a depender de los préstamos, lo que se tradujo en un aumento de la deuda.

En la subregión andina, sólo Perú cuenta con una estrategia nacional para responder a la pandemia de COVID-19, mientras que Ecuador y Venezuela no tienen ningún plan o estrategia que pueda ser monitoreada. Sin embargo, en la elaboración de la estrategia nacional en Perú, no hubo una participación coordinada y significativa de las OSC y miembros del sector privado. No hay información sustancial sobre la alineación de la AOD y el uso de los sistemas nacionales, ya que la información de la región ha sido vaga. La previsibilidad de la ayuda ha sido un gran problema, ya que no existe información oficial sobre la cantidad de ayuda asignada a la respuesta del gobierno. En cuanto a la armonización de la ayuda, se ha producido una coordinación oficial con las OSC y los gobiernos de Ecuador y Venezuela en lo que respecta a la canalización de la ayuda, pero, de nuevo, esto se ve obstaculizado por la falta de información oficial y detallada.



MENA

En Argelia, las respuestas del gobierno y de los donantes al COVID-19 muestran signos de adhesión al principio de apropiación. El gobierno ha asignado una cantidad importante de fondos para servicios y equipos sanitarios, utilizando fondos de donantes del FMI, el Banco



Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (BIRD) y la UE. Hasta el momento, no hay detalles sobre si estos fondos están condicionados.

Asimismo, los donantes han observado la priorización de las estrategias de los gobiernos nacionales. En Irak, preocupa la armonización de la respuesta de COVID-19, ya que el apoyo de los donantes llegó tarde. Además, la modalidad se ha basado en proyectos, y los donantes han solicitado diferentes propuestas para abordar distintas prioridades de desarrollo. Por último, preocupa la coordinación, ya que los trámites burocráticos dificultan la rápida coordinación entre los representantes de los organismos gubernamentales y las OSC. En Yemen, el impacto de la guerra civil en curso ha dificultado la apropiación del plan de respuesta COVID-19. No hay acciones coordinadas entre el partido gobernante y la oposición, lo que retrasa la respuesta a las comunidades.



Europa

Los gobiernos de Armenia y Albania han sido coherentes a la hora de desarrollar una estrategia nacional de respuesta al COVID-19. Se han creado planes de acción con fines de prevención y preparación. Sin embargo, los dos países europeos tienen experiencias diferentes en cuanto a la participación de las múltiples partes interesadas. Armenia adoptó un papel más proactivo en la participación de los ministerios, los gobiernos locales y las organizaciones públicas en el desarrollo de los planes nacionales. Albania informa de que las políticas propuestas por las OSC no fueron adoptadas por el gobierno. Los datos indican que la apropiación se vio reforzada por la coordinación armonizada de los donantes, facilitada por los acuerdos bilaterales y multilaterales suscritos con el Banco Mundial,

el FMI, la UE e incluso USAID. También mejoró gracias a la previsibilidad de la financiación del COVID-19, que preveía que la ayuda de los donantes sería a corto plazo y plurianual.

SECTORES



Rural

Los estudios de caso de Indonesia y Filipinas reconocen la ayuda proporcionada por los donantes y las instituciones financieras para asistir al gobierno. Lamentablemente, no hay participación de las OSC en la evaluación de necesidades y la planificación para aumentar la apropiación democrática de las políticas y estrategias de COVID-19.

En Bolivia, no hubo apropiación de la respuesta al COVID-19 porque en el momento en que éste afectó al país, estaba bajo el régimen instalado por un golpe de Estado. En lugar de elaborar un plan de respuesta eficaz, el gobierno de entonces estaba más centrado en reforzar su control del poder que en abordar el COVID-19 en el país.



Organizaciones religiosas

El gobierno de Zimbabue ha contado con enormes recursos para hacer frente a la pandemia. Sin embargo, esto ha dado lugar a abusos de poder y corrupción. Por ejemplo, la corrupción en la adquisición de material y equipos de respuesta a COVID-19 (por ejemplo, EPI) ha puesto en entredicho la credibilidad del gobierno en el manejo de los fondos de los donantes. Estas prácticas corruptas dieron lugar a una crisis de varios niveles caracterizada por el



colapso económico, la profundización de la pobreza, la inseguridad alimentaria y las violaciones de los derechos humanos.



Grupos Feministas

Las organizaciones feministas de Kirguistán han informado que no existe una estrategia nacional global ni un plan de respuesta estratégica gubernamental a largo plazo para COVID-19 que se dirija específicamente a las necesidades de mujeres y niñas.



Pueblos Indígenas

Los pueblos indígenas no tienen prioridad en las estrategias nacionales de COVID-19 en Filipinas. Como los objetivos de la respuesta a COVID-19 se formulan a nivel nacional, no se han cumplido los objetivos específicos para abordar las preocupaciones de los PI.



Migrantes

Los trabajadores migrantes no son prioritarios ni en los países de origen (emisores) ni en los de acogida (receptores), a pesar de que contribuyen en gran medida al crecimiento económico de los países en desarrollo. En Filipinas, se establecieron medidas para la repatriación de los trabajadores filipinos migrantes, pero se comprobó que eran problemáticas. Por ejemplo, hubo casos de migrantes repatriados que fueron retenidos durante un mes en centros de repatriación debido a retrasos en los procesos administrativos antes de que se les permitiera regresar a sus ciudades

de origen (Ranada, 2020). Aunque existen programas diseñados para absorber a los trabajadores migrantes desplazados, estos palidecen en comparación con lo que estos trabajadores migrantes recibían cuando trabajaban en el extranjero. Tampoco existen planes claros para integrar a los trabajadores inmigrantes en los programas nacionales de desarrollo. En el caso de los países receptores, Hong Kong y Tailandia, la mayoría de los trabajadores inmigrantes trabajan en el sector informal, por lo que no suelen verse reflejados en las prioridades de desarrollo de sus países de acogida. En Hong Kong, los trabajadores migrantes, como las empleadas domésticas, fueron objeto de violaciones de sus derechos, como el derecho a un día libre. Los trabajadores migrantes, tanto en Hong Kong como en Tailandia, tampoco fueron incluidos en las redes de seguridad económica que los gobiernos de acogida han puesto en marcha para hacer frente al impacto del COVID-19.



Juventud

En los países de los que proceden los casos de los jóvenes, la adhesión al principio de apropiación del país fue desigual. Algunos países como Afganistán y Bulgaria no tenían una estrategia unificada para hacer frente a la pandemia. Egipto impuso cierres parciales, cierre de establecimientos públicos y restricción de las reuniones públicas, mientras que India y Líbano impusieron cierres totales. Camerún puso en marcha un Plan de Preparación y Respuesta a COVID-19 por valor de 600 millones de dólares. La mayoría de los grupos de jóvenes encuestados en Afganistán y Camerún no conocían los planes y estrategias contra COVID-19.



La circunscripción juvenil señala que las OSC, incluidas las organizaciones juveniles, no participaron en la formulación de las estrategias nacionales de respuesta. Las oportunidades de participación de las OSC son limitadas, e incluso si las OSC han hecho sugerencias, los gobiernos no han atendido sus recomendaciones, como en el caso de India y Líbano. La rara excepción es Egipto, donde hay una notable participación de un amplio abanico de actores locales e internacionales, incluidos gobiernos extranjeros, IFI, socios de desarrollo y OSC.

B. Sobre el principio de Alianzas Inclusivas

La mayoría de los casos muestran una falta de esfuerzo gubernamental para reforzar la participación de la sociedad civil en la formulación, la aplicación y el seguimiento de las estrategias y los planes nacionales de COVID-19. La exclusión de las OSC va desde formas más leves de exclusión, como la falta de espacio formal en los organismos gubernamentales, pero se les permite operar de forma voluntaria (como en Nigeria y los países europeos), hasta escalas más sistemáticas de exclusión, como la restricción del espacio legal para que las OSC puedan operar.

En los países en los que, al parecer, se da espacio a las OSC para operar, suelen ser las más grandes, las más establecidas y las más afines al gobierno las que tienen un asiento en la mesa, lo que socava el potencial de las OSC para actuar como agente democratizador en la respuesta a COVID-19. La mayoría de los casos muestran que los gobiernos nacionales han aprovechado la pandemia de COVID-19 para restringir el espacio en el que operan las OSC.

REGIONES



Asia

Las respuestas de COVID-19 en muchos países asiáticos no reflejan el principio de las alianzas inclusivas. En Indonesia, el grupo de trabajo de COVID-19 ha obviado sistemáticamente a los representantes de las OSC a nivel nacional, provincial, municipal y de aldea. El grupo de tarea COVID-19 está dirigido por antiguos funcionarios militares, sin experiencia en la gestión de pandemias. El grupo de trabajo no cuenta con mecanismos a través de los cuales los actores de las OSC puedan actuar como socios para garantizar una implementación sin problemas y la responsabilidad en el desembolso de los fondos. En Filipinas, el Plan de Acción Nacional (NAP) desarrollado por el gobierno filipino para hacer frente a la pandemia no incluyó a las OSC en la fase de formulación, preparación, ejecución y seguimiento. El órgano de toma de decisiones está dominado por antiguos funcionarios militares que son reacios a la participación e iniciativas de la sociedad civil. La misma tendencia se observa en Kirguistán, donde los informes locales muestran que sólo se invitó a un número limitado de OSC a formar parte de los órganos gubernamentales destinados a abordar la pandemia de COVID excluyendo así a la mayoría de las OSC que operan en el país.



África

Varias OSC que operan en países africanos informaron de que existen mecanismos formales que pretenden integrar la participación de las OSC en los esfuerzos de los gobiernos para hacer frente a la pandemia. En Nigeria, hubo una fuerte coordinación entre los



diferentes actores del gobierno federal, los socios de desarrollo, la sociedad civil y los medios de comunicación. Estos actores también han recibido el apoyo adecuado de organizaciones internacionales como la OMS, los Centros Africanos para el Control de Enfermedades y la Organización de Salud de África Occidental. En Zimbabue, el Grupo de Trabajo Nacional para la Respuesta al COVID-19 adoptó un enfoque de múltiples partes interesadas que incluyó a las OSC (en particular, a las organizaciones religiosas) en la planificación y ejecución de la respuesta a COVID. Mientras tanto, en Kenia, se observó inicialmente que la formulación de la estrategia general fue realizada exclusivamente por el gobierno, pero la estructura para implementar el plan ha permitido la participación de las OSC. La mayoría de las OSC implicadas apoyaron la respuesta médica y humanitaria en el país.



LAC

Los casos de los países de las subregiones CAMEX y Andina muestran, en general, que los gobiernos nacionales de estas regiones excluyeron a las OSC del diseño, la implementación y el monitoreo de la respuesta y las estrategias al COVID-19, excepto en el caso de las OSC afines a los regímenes de estos países. La excepción entre los estudios de caso de LAC es Argentina, que ha incluido a las OSC en las consultas para desarrollar las respuestas nacionales al COVID.

Los activistas de las OSC han sido objeto de numerosos acosos, incluyendo arrestos, detenciones y amenazas a sus vidas, mientras que el espacio normativo para las actividades de las OSC se ha reducido a medida que los gobiernos nacionales obstaculizan las actividades de las OSC en estas regiones. A pesar de las amenazas y la

exclusión, las OSC se han mostrado activas en la asistencia humanitaria, la creación de capacidades y la movilización de la comunidad. En los países andinos, no ha habido diálogos sostenidos con las OSC ni acuerdos institucionales formales para su participación. Esto es decepcionante teniendo en cuenta que varios países, como Perú y Ecuador, cuentan con normativas que reconocen el papel de las OSC. La falta de acuerdos no ha impedido que las OSC elaboren propuestas y las presenten a sus gobiernos, pero éstas no se han tenido en cuenta. Una excepción notable es la propuesta de Renta Básica Universal presentada por las OSC en Perú.



Oriente Medio y Norte de África (MENA) —

En Irak, las asociaciones con las OSC se limitaron a fines de adquisición, como el suministro de equipos y herramientas a hospitales, centros de salud y unidades de cuidados intensivos. No hubo verdaderas consultas ni colaboraciones con las OSC sobre cómo abordar la pandemia, aunque sí hubo algunos representantes de las OSC en comités y grupos de trabajo. Estos servicios estaban dirigidos a los ciudadanos vulnerables. En Yemen, no hubo una participación notable de la sociedad civil ni de otras partes interesadas en el diseño o la aplicación de las políticas de respuesta. Las OSC se vieron relegadas en su mayoría a recibir información, sin ninguna participación real en la toma de decisiones públicas.



Europa

En Europa, se ha observado que existen diferentes niveles de compromiso entre el gobierno y la sociedad civil. En Armenia, se obser-

vó que faltaba la participación de las OSC en el diseño y la aplicación de la estrategia de respuesta y prevención de COVID-19. Las OSC tampoco están representadas en los órganos de decisión del gobierno. En Albania, no hubo participación de las distintas partes interesadas en el diseño, la implementación y el monitoreo de las estrategias y políticas nacionales de respuesta al COVID-19. Al mismo tiempo, tampoco hubo mecanismos o políticas para incorporar las recomendaciones de las OSC en la estrategia. Las OSC han acusado al gobierno de monopolizar la información relacionada con la respuesta al COVID.

SECTORES



Rural

En Indonesia y Filipinas, no existe una alianza inclusiva entre el gobierno nacional y las organizaciones rurales sobre la respuesta al COVID-19. No existen mecanismos democráticos que garanticen la participación de las OSC en la planificación, ejecución y evaluación de la estrategia nacional contra el COVID-19. En Bolivia, existe una asociación entre el Estado y las organizaciones internacionales como la OMS-OPS (Organización Panamericana de la Salud), la ONU, la OEA (Organización de Estados Americanos), el Banco Mundial, el FMI y otros en el diseño, implementación y monitoreo de las estrategias y políticas de respuesta al COVID-19. En las entidades subnacionales, esta tarea ha sido llevada a cabo por los comités de operaciones de emergencia municipales o departamentales, según se considere oportuno. Después de tres meses de cuarentena, las OSC comenzaron a cuestionar las acciones del gobierno central y de los gobiernos subnacionales, ya que estas acciones no mostraron resultados satisfactorios.



Organizaciones Religiosas

La Fuerza de Trabajo Nacional de Respuesta al COVID-19 de Zimbabue ha intentado incorporar un enfoque de múltiples partes interesadas. El gobierno incluyó a actores religiosos y líderes tradicionales como parte del grupo de trabajo para ayudar a difundir información sobre la pandemia a todos los zimbabuenses. También se les incluyó en la planificación de la reapertura segura de los lugares de culto. Por ejemplo, el Consejo de Iglesias de Zimbabue participó activamente en el grupo de educación de la fuerza de trabajo COVID.



Grupos Feministas

La participación de las organizaciones feministas es escasa debido a la falta de iniciativa de los gobiernos nacionales a la hora de incluir las cuestiones de las mujeres y las niñas en su respuesta al COVID.



Pueblos Indígenas

En el caso del sector de los pueblos indígenas de Filipinas, la formulación del NAP para responder a la pandemia de COVID-19 no garantizó la participación de los grupos de PI y de las OSC en la planificación, ejecución y evaluación de los planes relacionados con COVID-19. El gobierno no hizo ningún esfuerzo por incluir sus problemas y necesidades en las estrategias de respuesta a COVID.





Migrantes

No hay pruebas de la participación de las OSC en la elaboración y formulación de las respuestas a COVID-19 diseñadas para aliviar las condiciones de los trabajadores migrantes, tanto en los países emisores como en los receptores. En Filipinas, las OSC de defensa de los migrantes no están incluidas en la formulación de políticas y programas que absorban a los trabajadores migrantes desplazados por la pandemia. Las OSC tampoco forman parte de los programas diseñados para recibir a los migrantes repatriados, como los programas relacionados con las pruebas, el aislamiento en cuarentena y la respuesta general a la pandemia de COVID-19. En los países receptores, no hay informes de una fuerte colaboración entre las OSC y los gobiernos receptores para aliviar las condiciones de los trabajadores migrantes desplazados. Por ejemplo, las organizaciones de trabajadores migrantes no están incluidas en los procesos de elaboración de políticas de los gobiernos de Tailandia y Hong Kong, por lo que los países receptores no abordan inmediatamente las cuestiones relativas a estos últimos.



Juventud

Según el informe de la circunscripción de jóvenes, faltan instituciones para formar alianzas inclusivas entre los gobiernos nacionales y las OSC de jóvenes. En India, Camerún y Afganistán, las organizaciones juveniles han informado de que no existen mecanismos que permitan una asociación entre las OSC juveniles y los gobiernos nacionales. Además, los gobiernos nacionales de estos países no son receptivos a las recomendaciones de las OSC.

En Bulgaria, se consultó a los actores del desarrollo en cumplimiento de la estrategia general de la UE, aunque se puede hacer más para garantizar una asociación fuerte, eficiente y duradera entre las OSC de jóvenes y los gobiernos nacionales. En Egipto, las OSC no participaron en el proceso de elaboración de la agenda y de seguimiento de las políticas de respuesta, especialmente en los asuntos relacionados con la ayuda financiera y las instalaciones donadas. El papel de las OSC y del público quedó relegado a conformarse con las medidas preventivas. En el Líbano, hay poca o ninguna información sobre la relación de trabajo entre el gobierno nacional, los actores internacionales del desarrollo y las OSC. La información disponible públicamente no permitió concluir si las consultas con las OSC son productivas o simbólicas.

C. Sobre el principio de transparencia y responsabilidad

Los estudios de caso presentados implican un débil nivel de adhesión al principio de Transparencia y Responsabilidad. En la mayoría de los casos, los gobiernos nacionales o federales implementan una forma de difusión de información sobre sus respectivas respuestas a COVID-19. Estos planes de comunicación van desde los discursos semanales de los líderes del gobierno, hasta las sesiones informativas diarias para la prensa y la publicación de los desembolsos presupuestarios de COVID-19 en los sitios web del gobierno.

Más allá de esto, no existen mecanismos de participación y retroalimentación pública en los que los ciudadanos puedan contribuir y monitorear las medidas del gobierno. No existen organismos gubernamentales formales dedicados a funciones de supervisión de múltiples partes interesadas exclusivamente



para la respuesta a COVID-19. Los organismos de supervisión existentes en los gobiernos nacionales (por ejemplo, la Comisión de Auditoría en Filipinas) no ofrecen espacios para que los actores de las OSC participen en el monitoreo real de las respuestas al COVID-19.

La mayoría de los países muestran un nivel débil de aplicación de los mecanismos de reclamación, ya que la mayoría de las reclamaciones se presentan como informes de violaciones, pero sin una vía clara para garantizar la rendición de cuentas contra los funcionarios y organismos infractores.

Las bases de datos de los donantes no muestran si los fondos se destinan a las respuestas de COVID en el extranjero. Por lo tanto, es necesaria una presentación de datos más sistematizada y la difusión regular de información para garantizar la transparencia y la responsabilidad en las respuestas de los donantes.

REGIONES



Asia

En la mayoría de los países asiáticos estudiados se dispone de información básica sobre los fondos, pero la falta de mecanismos de supervisión compromete la credibilidad de la información. En Filipinas, por ejemplo, el departamento de presupuestos publicó un documento en el que se enumeraban los proyectos relacionados con COVID-19 incluidas las fuentes de fondos y el organismo

de ejecución. Sin embargo, no existe ningún mecanismo que permita controlar los procesos de utilización y/o desembolso de los fondos. En Indonesia, el Ministerio de Finanzas, en colaboración con el Banco Mundial, realizó una revisión del gasto público. Estas formas de transparencia y rendición de cuentas son débiles porque no cuentan con mecanismos de supervisión que las acompañen ni con una participación sustancial de las OSC para superar la corrupción y la mala gestión.



África

En general, no existen estructuras claras para monitorear el flujo de la financiación de COVID-19 y garantizar la responsabilidad y la transparencia en la aplicación de las estrategias nacionales. En Nigeria, hay una sesión informativa semanal del grupo de trabajo presidencial, pero ésta no incluye detalles sobre cómo se está utilizando el dinero para la respuesta a COVID-19. Hay varios informes sobre el terreno de cómo los contratos para la respuesta a COVID-19 se adjudicaron de forma precipitada a nivel estatal. En Kenia, la información relacionada con la respuesta al COVID-19 está centralizada en los organismos gubernamentales y se difunde regularmente para sensibilizar al público en general. Sin embargo, no existen mecanismos por los que las OSC puedan hacer partícipe al gobierno de asuntos relacionados con la transparencia y la rendición de cuentas. Los organismos gubernamentales no han respondido a las solicitudes formales de las OSC para abordar las preocupaciones relacionadas con la transparencia y la rendición de cuentas, mientras que no existen mecanismos formales de reclamación a los que los ciudadanos puedan acceder cuando tengan quejas relacionadas con la respuesta al COVID-19.



Latinoamérica y el Caribe (LAC)

Hay diferentes niveles de cómo se ha observado el principio de Transparencia y Rendición de Cuentas en los países de la región. Algunos gobiernos se han comprometido a ser transparentes en la información relacionada con la respuesta al COVID-19. En Argentina, el gobierno ha desarrollado un plan de comunicación que incluye actualizaciones públicas. Sin embargo, no existe una estructura formal (agencia/oficina) que funcione como un comité de supervisión para monitorear la implementación del plan. México, por su parte, cuenta con información sobre la respuesta al COVID-19 en su portal de datos abiertos sobre gastos relacionados con la emergencia y prestaciones sociales. Si bien estos esfuerzos por resaltar la transparencia de la información son encomiables, al no existir un comité de supervisión general, siguen faltando mecanismos de retroalimentación y quejas.

La transparencia y la rendición de cuentas en la respuesta al COVID-19 es una preocupación apremiante para los países de la subregión andina, ya que los países carecen de información oportuna y completa sobre el impacto del COVID-19 en la región. Hay preocupación por la mala gestión de los datos del COVID-19 por parte de los gobiernos y los actores externos. Por ejemplo, miembros de la academia en Ecuador han notado que no se reportan todos los casos. Los países de la subregión no han implementado acuerdos institucionales para abordar el seguimiento de la respuesta al COVID-19, las quejas derivadas de la respuesta y los mecanismos de reparación de dichas quejas, lo que dificulta los mecanismos de rendición de cuentas en la región.

En general, los estudios de caso de LAC muestran una falta de representación de las OSC en los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. No están incluidas en los procesos de gestión de datos. No existe un mecanismo de control para verificar los datos publicados por los gobiernos en sus estrategias de COVID-19. Las OSC tampoco forman parte de ningún mecanismo de reclamación y reparación en la región.



Oriente Medio y Norte de África (MENA)

En general, existe un bajo nivel de transparencia y rendición de cuentas en la región MENA, según los casos presentados. En Irak, existe una importante falta de transparencia por parte de los donantes, las agencias de la ONU y otras organizaciones internacionales en cuanto a la asignación y el desembolso de fondos. En cuanto a la información oportuna, las actividades y eventos relacionados con la respuesta al COVID-19 se limitan a anunciarse en sus páginas web. En Argelia también existe una tendencia a controlar la información. Por ejemplo, el presidente Tebboune dio instrucciones para tomar todas las medidas necesarias para impedir la difusión de cualquier información o estadística de COVID-19 que se publique fuera de la estrategia oficial. En Yemen, el acceso a la información es muy difícil, lo que ha dado lugar a disputas sobre el número real de casos. Además, el público no tiene acceso al plan de respuesta del gobierno. Un problema adicional es la falta de información sobre la ayuda extranjera o los programas de desarrollo de las organizaciones internacionales. No se han realizado consultas públicas para transmitir las prioridades y la estrategia.



Europa

En Albania, no existen mecanismos formales para garantizar la transparencia y la responsabilidad del gobierno en su respuesta al COVID-19. Por lo tanto, las OSC se han encargado de garantizar que el gobierno sea transparente y rinda cuentas. Durante el punto álgido de la pandemia de COVID-19, se han manifestado ante las autoridades y los medios de comunicación sobre estas cuestiones, exigiendo un mayor nivel de responsabilidad por parte de las instituciones estatales. Un grupo de OSC escribió una carta dirigida al Presidente, al Primer Ministro y al Presidente del Parlamento, pidiéndoles que garantizaran los principios de transparencia y buena gobernanza. Les pidieron que suspendieran las decisiones que no tuvieran una importancia inmediata para la salud y la seguridad de las personas. En Armenia, el gobierno publica regularmente información sobre la tasa de infección y la respuesta del gobierno, aunque se puede argumentar que, sin mecanismos de control, es difícil establecer la validez de los datos. El gobierno armenio ha puesto en tela de juicio el derecho de reunión y el derecho a la privacidad, algunas de cuyas violaciones se hicieron con el pretexto de la respuesta a COVID-19. Esto ha dado lugar a restricciones del espacio de las OSC.

SECTORES



Rural

En Filipinas e Indonesia, los informes de la circunscripción rural mostraron que existen leyes para acceder a la información pública, pero en la práctica, la información pública está limitada por la creación de grupos de trabajo cuya aplicación de políticas no es inclusiva. Los informes sobre el desarrollo y la ayuda humanitaria están disponibles, pero los datos se limitan al número de beneficiarios y al importe de las donaciones. Estos informes no incluyen información sobre la difícil situación del sector agrícola y cómo se ven afectados por la pandemia.

Se hicieron esfuerzos para responsabilizar a los funcionarios que cometieron errores. El Ministro de Salud de Bolivia fue detenido por sospechas de corrupción relacionadas con la compra de ventiladores a precios excesivos. El gobierno boliviano compró 179 ventiladores a un fabricante español por US\$ 27.683 cada uno, con un coste de casi 5 millones de dólares. Más tarde se reveló que el fabricante ofrecía ventiladores por EUR 9.500-11.000 cada uno (US\$ 10.312-11.941) (AFP, 2020). En Filipinas, se está investigando a 183 funcionarios de los barangay (pueblos) acusados de anomalías en la distribución de sub-vencciones en efectivo del Paquete de Mejora Social (SAP) (Gonzales, 2020). Hay alrededor de 886 funcionarios del gobierno local, de los cuales 364 son elegidos y el resto nombrados, que se enfrentan a diversos cargos penales y administrativos debido a sus presuntas infracciones en la distribución de ayudas en efectivo en el marco del SAP.





Grupos Feministas

La circunscripción feminista señala que no existen marcos de transparencia y rendición de cuentas específicamente diseñados para abordar las necesidades de las mujeres y las niñas en la pandemia de COVID-19.



Pueblos Indígenas

La Comisión Nacional de Pueblos Indígenas (NCIP) de Filipinas ha informado de que ha llevado a cabo campañas de información en las comunidades de los pueblos indígenas para "explicar los peligrosos efectos del COVID-19", incluida la necesidad de respetar las normas que prohíben las reuniones masivas que contradicen sus valores culturales (NCIP, 2020). Sin embargo, la agencia no ha proporcionado información específica sobre los programas y el gasto en la lucha contra COVID-19.



Migrantes

La falta de representación de las OSC de migrantes, tal y como se ha señalado en el apartado anterior, también afecta al papel del sector de los trabajadores migrantes a la hora de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. Aunque la difícil situación de los trabajadores migrantes aparece en las noticias

y en los medios sociales, no existe un mecanismo claro de rendición de cuentas que garantice el respeto de sus derechos y la aplicación de los programas destinados a ellos.



Juventud

En los países de los que proceden los casos de circunscripciones juveniles, la aplicación de los principios de transparencia y responsabilidad es mínima. En el caso de Egipto, el gobierno no involucró a las OSC en la elaboración de las estrategias de respuesta ni en la evaluación y monitoreo de las mismas. En la India, el gobierno puso en marcha mecanismos de reclamación y reparación, pero las OSC no han sido invitadas a estos mecanismos. En Bulgaria, las OSC participan de forma muy limitada (es decir, la participación es por invitación y sólo se extiende a organizaciones seleccionadas). Varios gobiernos no disponen de sistemas de rendición de cuentas para hacer un seguimiento de las violaciones de los derechos humanos, como en el caso de Afganistán, o carecen de información coherente y oportuna, como en el Líbano, donde no hay informes periódicos sobre el seguimiento de las donaciones, las transferencias de ayuda y otra información relacionada. Por lo tanto, es difícil para las OSC de jóvenes garantizar la transparencia y la responsabilidad de los mecanismos y procesos gubernamentales.



D. Sobre el principio de enfoque en los resultados

El principio de enfoque en los resultados destaca la necesidad de que los marcos gubernamentales nacionales hagan hincapié en la transparencia y la posibilidad de medir los resultados. Los casos de los países muestran un grado variable de cumplimiento de este principio. Unos pocos han implementado un marco para monitorear y evaluar el progreso de los programas de la pandemia COVID-19 para asegurar que se logren los resultados.

Sin embargo, la mayoría de los países carecen de dicho marco. Los resultados se comunican en términos de cantidades e importes financieros, pero no se conectan con marcos más amplios de desarrollo sostenible. Además, no se hace ningún esfuerzo por ampliar los resultados fuera del marco de la relación calidad-precio, y se carece de datos sobre la consecución de resultados que tengan como objetivo abordar las debilidades estructurales de los gobiernos nacionales.

REGIONES



Asia

Los estudios sobre India y Kirguistán carecen de pruebas sobre la existencia de un marco orientado a los resultados o de mecanismos

específicos de evaluación y monitoreo en la respuesta al COVID-19. En Filipinas, aunque el gobierno ha publicado regularmente informes de progreso, los mecanismos de monitoreo y evaluación utilizados han sido cuestionables. Por ejemplo, el departamento de salud del país ha sido criticado por las anomalías en sus datos, que son inexactos e incoherentes (CNN Filipinas, 2020). Esto, a su vez, ofrece un estado impreciso del país en cuanto a su lucha contra COVID-19. Las estadísticas sobre COVID-19 en Filipinas revelan los resultados, o la falta de ellos, de las medidas: Filipinas tiene el mayor número de casos totales (479.693) y de muertes (9.321) de toda la Región del Pacífico Occidental (que consta de 23 países y territorios, incluida China) a 5 de enero de 2021 (OMS WPRO, 2021).



África

En África, la adhesión a este principio varía en cierta medida. En Nigeria, el gobierno y sus socios internacionales se han esforzado por monitorear y evaluar continuamente los progresos realizados en la prevención de la transmisión, así como en las pruebas y el rastreo de las personas infectadas. Según el gobierno y otras partes interesadas, estos esfuerzos actuales han dado sus frutos, como indica el aplanamiento de la curva en el país. Por el contrario, aunque el grupo de trabajo de COVID-19 en Zimbabue celebra reuniones quincenales y los informes de progreso actualizados sobre las pruebas, el rastreo y la atención adecuada rara vez se entregan. Por otro lado, los informes sobre Kenia y Gabón no aportaron pruebas sobre esta cuestión.



Latinoamérica y el Caribe (LAC)

El informe de las circunscripciones de la OSC en el CAMEX no informó de un marco basado en resultados para la respuesta gubernamental al COVID-19 en los países representados en los estudios de caso. Se carece de un sistema de información para seguir el progreso de la respuesta al COVID-19, así como sistemas para identificar indicadores que puedan utilizarse para medir el éxito de las estrategias y la respuesta al COVID-19.

Perú cuenta con un marco basado en resultados para la respuesta al COVID-19, mientras que Ecuador y Venezuela no cuentan con este tipo de informes. Sin embargo, no hay información específica sobre estas respuestas, como lo demuestra la falta de informes de progreso sobre las estrategias y acciones tomadas por los gobiernos. Este vacío en el monitoreo de los avances y el análisis de los datos ha sido llenado por la academia y las OSC de la región, aunque se carece de un sistema de datos centralizado.



Europa

Un problema acuciante en los casos de los países europeos fue la falta de participación de las múltiples partes interesadas en la creación de planes y estrategias nacionales para responder a la pandemia. Las OSC de la región han sido proactivas a la hora de ofrecer sus análisis y recomendaciones, pero en general, no han

sido incorporadas a los planes oficiales. Esto, si se tiene en cuenta, podría haber ayudado a orientar algunas respuestas hacia las necesidades de las bases. La eficacia del desarrollo sólo puede considerarse exitosa si se dan criterios como la participación de múltiples partes interesadas.

SECTORES



Rural

En Indonesia, no hay informes periódicos sobre la aplicación de la estrategia nacional, ya que los casos de COVID-19 siguen aumentando. La estrategia nacional de recuperación económica aplicada mediante la reorientación y la reasignación del presupuesto no ha conseguido hacer frente al declive económico: la tasa de pobreza ha aumentado, 30 millones de MIPYMES han quebrado y el aumento de los préstamos de usura ha atrapado a los campesinos en una pobreza prolongada. Los campesinos, especialmente las mujeres, se llevan la peor parte de la pandemia, el aumento del hambre y la desnutrición, especialmente entre la población rural. Bolivia ha promulgado normas de auditoría, control social y rendición de cuentas para garantizar la transparencia en la administración pública. Sin embargo, no se han creado específicamente para las necesidades de la pandemia o la cuarentena. Aunque existe un marco de resultados, es difícil de monitorear ya que no hay una verdadera representación de la OSC en la cúpula de la formulación de políticas del gobierno.



Grupos Feministas

Se carece de un marco basado en los resultados a la hora de abordar las necesidades de las mujeres y las niñas en la respuesta al COVID-19.



Pueblos indígenas

El caso de Filipinas muestra que no hay adhesión a un marco basado en resultados en la aplicación de la respuesta COVID-19. Aunque las leyes internacionales y nacionales exigen una mayor representación de los pueblos indígenas en diversas facetas de las políticas nacionales de desarrollo, el Plan de Acción Nacional COVID-19 no se aplicó con su participación. La ausencia de una respuesta basada en los derechos en la respuesta sanitaria global contribuye a mantener los ataques en curso contra los PI y otros sectores marginados.



Juventud

Las circunscripciones juveniles del Líbano informan de que el público puede seguir el número diario de casos en el mapa "Casos de Coronavirus en el Líbano". El mapa contiene el total de casos, las muertes, los nuevos casos, la fuente de exposición, los casos a lo

largo del tiempo, los casos por distrito, los casos por género y los casos por edad. El gobierno utiliza estas cifras para promulgar medidas reactivas destinadas a contener agresivamente la propagación en curso del COVID-19 y para monitorear las capacidades de respuesta. Sin embargo, no existe un marco claro basado en los resultados. De hecho, las medidas adoptadas son reactivas más que calculadas y no se ajustan a una estrategia a largo plazo que tenga en cuenta el contexto socioeconómico del país. En Bulgaria, la circunscripción de jóvenes informa de que no existen indicadores de medición específicos para la respuesta al COVID-19.

E. Sobre el principio de no dejar a nadie atrás y la aplicación de los derechos humanos en la respuesta a COVID-19

Hay pruebas fehacientes de que se han violado los derechos humanos en todos los países al aplicar las respuestas a la pandemia. En todos los casos, tanto nacionales como sectoriales, los gobiernos han obviado o violado, en distinto grado, las leyes y normas sobre derechos civiles y políticos. A menudo, estas violaciones se ocultaron como esfuerzos para controlar la propagación del COVID-19. En realidad, estas violaciones persiguen diversos intereses económicos y políticos. Del mismo modo, la mayoría de las respuestas a la pandemia han conducido al empeoramiento de las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales, especialmente entre los marginados.



REGIONES



Asia

La respuesta al COVID-19 en Asia se ha llevado a cabo sin una amplia consideración de los derechos humanos. En la India, la aplicación desordenada del cierre en marzo dejó varados a millones de trabajadores migrantes internos, especialmente los del sector informal. No pudieron volver a casa debido a la suspensión del transporte público. La falta de un plan para abordar cómo afectará el cierre a la economía informal creó un problema de derechos humanos, ya que millones de trabajadores indios desafiaron las directrices del cierre para ganarse la vida. Lo más alarmante fue que la policía india tomó violentas represalias y encarceló a los infractores de la cuarentena. Otros no tuvieron tanta suerte, ya que varios infractores fueron golpeados en público o sometidos a brutales torturas. También han surgido casos de asesinatos atribuidos a la policía india.

En Filipinas, la aplicación del NAP sobre la pandemia de COVID-19 ha hecho caso omiso de las leyes y los principios básicos de derechos humanos, lo que ha dado lugar a violaciones del derecho a la intimidad, la asociación y la circulación, entre otros. Las detenciones de personas que supuestamente infringieron las normas de cuarentena, como la obligación de llevar mascarilla, se realizaron sin tener en cuenta el debido proceso. La resolución de las violaciones de la cuarentena suele llevar mucho tiempo, y muchos infractores pasan días o semanas detenidos.



África

En Gabón, la respuesta al COVID-19 se ha convertido en una amenaza para los derechos humanos. La declaración del estado de emergencia sanitaria ha provocado numerosos abusos por parte de las fuerzas policiales, detenciones arbitrarias y casos de intimidación. En Nigeria, la aplicación de los cierres patronales y las medidas de distanciamiento social también estuvieron marcadas por la elevada incidencia de violaciones de los derechos humanos atribuidas a los agentes de seguridad. Hasta el 15 de abril, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) había recibido 105 denuncias de violaciones de derechos en 24 de los 36 estados del país. La CNDH también está investigando casos de 29 ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos, como la violación del derecho de circulación, la detención y la prisión ilegales, la incautación o confiscación de bienes, la violencia sexual y de género, la discriminación, la tortura, el trato inhumano y degradante y la extorsión. En Kenia, la fase inicial de aplicación de las medidas de contención estuvo marcada por varios casos de violaciones de derechos humanos. En un caso, la policía disparó y mató al menos a tres (3) personas y muchas más sufrieron heridas. También se produjeron varios casos de corrupción, ya que los ciudadanos que fueron sorprendidos después de las horas del toque de queda sobornaron a la policía para poder volver a casa.



Europa

En Albania, el gobierno propuso al parlamento modificar el Código Penal para penalizar a los infractores de la cuarentena, así como a los propagadores asintomáticos, con hasta 15 años de prisión. Esta propuesta contó con la oposición de las OSC. El parlamento redujo la pena a un máximo de ocho (8) años de prisión y sólo impuso una multa para los asintomáticos. En Armenia, el gobierno introdujo prohibiciones y vetos a las reuniones públicas, que incluían protestas y huelgas. Además, el parlamento, con el pretexto de la respuesta COVID-19, permitió al gobierno acceder a los datos de los teléfonos móviles de las personas, vulnerando el derecho a la intimidad de los ciudadanos.



Latinoamérica y el Caribe

Los estudios de caso de LAC mencionaron varias violaciones de los derechos civiles y políticos, así como la posterior violación de los derechos económicos, sociales y culturales de la población, incluidos los pueblos indígenas. La violación de los derechos civiles y políticos incluye la persecución del periodismo alternativo y de investigación mediante insultos y la limitación del acceso a las conferencias de prensa, así como el acoso digital por parte de miembros del partido gobernante en El Salvador. Otras formas de violación de derechos son la militarización de las comunidades indígenas en Guatemala, el abuso de las fuerzas del Estado en el marco de los nuevos protocolos de seguridad en Argentina, las condiciones inhumanas de los presos políticos en Nicaragua y los

casos de represión política en Ecuador, Perú y Venezuela. Otras violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales son la falta de acceso al agua y a la educación en línea en Honduras, los desalojos de familias indígenas y la falta de acceso a la educación en línea en Guatemala y la falta de protección adecuada de los trabajadores sanitarios en la subregión andina.



Oriente Medio y Norte de África (MENA)

En la región MENA, la falta de un enfoque basado en los derechos humanos en la respuesta a la pandemia contribuyó a la proliferación de violaciones de los derechos humanos. En Argelia, varias violaciones de los derechos humanos incluyeron las detenciones arbitrarias de activistas, periodistas y miembros de la oposición política. Los informes destacan cómo se utilizó el sistema judicial durante la pandemia de COVID-19 para reprimir a la oposición y lanzar una ofensiva judicial contra los activistas que incluía una prolongada estancia en centros de detención. En Irak, las violaciones iban desde los insultos cotidianos, las palizas y los afeitados de cabeza contra los infractores de la cuarentena hasta las violaciones de derechos más amplias contra los periodistas. Mientras tanto, los efectos de la guerra civil también han repercutido en los derechos humanos en la región, ya que Human Rights Watch documentó la obstrucción de la ayuda humanitaria COVID-19 que llegaba a Yemen por parte de las fuerzas Houthi, un movimiento político armado que ha estado librando una guerra civil contra el gobierno yemení desde 2014.





SECTORES



Rural

Deben establecerse sistemas estrictos de rendición de cuentas para garantizar que las medidas de COVID-19 sean coherentes con las leyes y normas de derechos humanos, con el reconocimiento de los instrumentos de derechos de las mujeres y el uso de enfoques basados en el género y los derechos humanos. Sin embargo, la gestión gubernamental de la pandemia dio lugar a muchos tipos de violaciones de los derechos humanos. En Indonesia y Filipinas, los gobiernos respectivos han prohibido la expresión política, la reunión y las protestas masivas. Los manifestantes han sido amenazados con detenciones y/o sanciones. Tanto el gobierno indonesio como el filipino han dado incluso instrucciones de disparar a los infractores de la cuarentena y a los manifestantes. En Filipinas, las organizaciones rurales progresistas han sido acosadas y acusadas de ser simpatizantes de los rebeldes.

Amnistía Internacional ha señalado que algunas respuestas a la pandemia aplicadas por el gobierno boliviano violan la libertad de expresión de los ciudadanos y permiten a las autoridades iniciar procesos penales contra trabajadores de la salud, periodistas y líderes políticos que expresan opiniones críticas con las políticas del gobierno. El gobierno no ha cumplido con las leyes y normas de derechos humanos. Por ejemplo, el sistema sanitario no proporciona una atención oportuna y de calidad y el Estado no garantiza el derecho a la educación y el derecho a la alimentación en medio de la pandemia. Muchas de las víctimas de la falta de cumplimiento de las leyes y normas de derechos humanos proceden de comunidades rurales.

En cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales, en general, las personas que viven en las zonas rurales, especialmente los pobres, no tienen acceso, o tienen un acceso limitado, a las pruebas, a la asistencia sanitaria y a las instalaciones médicas. También han perdido sus ingresos y sufren la falta de alimentos y el hambre y la falta de acceso a la educación en línea.

En Indonesia, el gobierno ha proporcionado una ayuda alimentaria básica a las personas cuyos ingresos se redujeron o a las que perdieron su empleo, pero no hay garantías de trabajo de sustitución ni indemnizaciones para las MIPYMES en quiebra. Además, no hay políticas ni facilidades especiales para las mujeres y los niños, especialmente para las mujeres embarazadas y los niños pequeños, que son mucho más susceptibles a la infección por COVID-19.

En Filipinas, el Programa Balik Probinsiya, Bagong Pagasa (que significa Regreso a la Provincia, Nueva Esperanza) del gobierno de Duterte ofreció una falsa esperanza a los pobres urbanos, ya que a las familias que regresan a las provincias les esperan problemas fundamentales debido a la falta de una verdadera reforma agraria y de desarrollo rural. Los estudiantes rurales se están quedando atrás porque no pueden permitirse aparatos y portátiles. Los cortes de electricidad son habituales y el acceso a Internet no está disponible o es intermitente en las zonas rurales. El aprendizaje modular también agrava el trabajo de cuidado no remunerado de las mujeres rurales, que ya están preocupadas por encontrar ingresos en medio de los cierres.



Organizaciones Religiosas

Las respuestas que se configuran y reflejan el respeto a los derechos humanos dan mejores resultados a la hora de vencer la pandemia, garantizar la asistencia sanitaria para todos y preservar la dignidad humana. Además, garantizan que se preste atención a los que más sufren. Las respuestas de salud pública sólo son plenamente eficaces si se basan en los derechos humanos y cuentan con la confianza inquebrantable de las comunidades. Aunque el gobierno de Zimbabue ha puesto en marcha medidas para mitigar la propagación de la pandemia de COVID-19, no existe un compromiso claro de adhesión a las normas y leyes de derechos humanos en el proceso de aplicación de la estrategia para hacer frente a la pandemia de COVID-19.



Grupos Feministas

El caso de Kirguistán demostró que no había una evaluación unificada a nivel nacional de las necesidades de los grupos empobrecidos y marginados. Las estrategias nacionales de respuesta al COVID-19 no son sensibles al género y no tienen en cuenta las consecuencias de la pandemia en las mujeres y las niñas. Todos los materiales accesibles al público indican la falta de un enfoque de género. Ninguno de los planes gubernamentales cuenta con análisis y mecanismos para proteger o promover los derechos de las mujeres.



Pueblos Indígenas

Para el sector de los Pueblos Indígenas, el caso de Filipinas demuestra que no se respetan las leyes y normas de derechos humanos en la aplicación de la respuesta COVID-19. Aunque las leyes internacionales y nacionales exigen una mayor representación de los pueblos indígenas en diversas facetas de las políticas nacionales de desarrollo, el PAN de la COVID-19 no se aplicó con su participación. Además, el estudio señala la intensificación de la militarización de las comunidades rurales e indígenas durante la pandemia. La ausencia de una respuesta a la pandemia basada en los derechos contribuye a mantener los continuos ataques contra los Pueblos Indígenas y otros sectores marginados.



Migrantes

La precariedad y la invisibilidad de los trabajadores migrantes han contribuido a la violación de los derechos de los trabajadores migrantes afectados por la pandemia. Los migrantes no están incluidos en la respuesta del país receptor, lo que contribuye a su invisibilidad. La mayoría de los trabajadores migrantes extranjeros no son beneficiarios de las medidas de protección social. Los trabajadores migrantes sólo pueden acceder al seguro médico a través de sus empleadores, por lo que los migrantes desempleados no pueden acceder a este seguro.



Los países de origen, como Filipinas, cuentan con programas de repatriación, pero éstos se caracterizan por una respuesta inhumana, como las largas e injustificadas cuarentenas, el retraso en la concesión de autorizaciones, la falta de información sobre los protocolos (por ejemplo, cómo trasladarse de un lugar a otro) y el hecho de que se les haga pagar por varios servicios relacionados con la repatriación, incluido el pago de las pruebas de COVID-19.

Pero más allá de las respuestas a los impactos inmediatos de la pandemia, no dejar atrás a los migrantes significa que los gobiernos de los países emisores deben forjar y recorrer un

camino de desarrollo que cree puestos de trabajo decentes en casa y acabe con la exportación de mano de obra.



Juventud

Las OSC de jóvenes han informado de que los gobiernos no han habilitado un enfoque basado en los derechos humanos en sus respectivas respuestas al COVID-19. Los derechos humanos no se respetan en su totalidad en las estrategias nacionales de respuesta y, en algunos casos, se ignoran en gran medida.



Photo by Ryutaro Tsukata from Pexels

Buenas prácticas de las OSC para potenciar los principios del CED en su respuesta al COVID-19



Esta sección se centra en cómo las OSC de diferentes regiones han participado en la respuesta al COVID-19 en varios ámbitos: operaciones de ayuda, coordinación con el Estado para acceder a la financiación oficial para el desarrollo, asistencia jurídica y monitoreo, investigación y evaluación de las necesidades de las circunscripciones e incidencia.



Operaciones de auxilio nacionales y locales

Las OSC han llevado a cabo operaciones de auxilio rápidas y esenciales para atender las necesidades de las personas y las comunidades tras la pandemia de COVID-19. Esta participación tiene por objeto subsanar las deficiencias de las respuestas estatales mediante el suministro de necesidades básicas, como alimentos y otros artículos de primera necesidad, y el suministro de equipos sanitarios, como equipos de protección personal (EPP), mascarillas y kits/dispositivos de análisis para el personal médico de primera línea y otros grupos vulnerables. Dado que cuentan con información de sus comunidades, las OSC desempeñan un importante papel a la hora de atender las necesidades de sus circunscripciones, lo que hace que sus intervenciones tengan un gran impacto.

En Guatemala, las OSC se han asociado con la Iglesia Católica, la Universidad Mesoamericana, grupos empresariales, familias y grupos de jóvenes para distribuir alimentos y semillas para personas vulnerables, ancianos, personas en situación de pobreza y extrema pobreza y el sector informal en localidades de todo el país. También han desarrollado iniciativas ciudadanas para capacitar a las mujeres en el procesamiento de alimentos, la siembra de hortalizas y la producción de mascarillas, entre otras cosas. En Filipinas, las OSC han sido capaces de movilizar recursos humanos para crear centros de auxilio y proporcionar ayuda inmediata. Entre ellas se encuentra CURE COVID (Respuesta Ciudadana Urgente para Acabar con el COVID-19), un esfuerzo conjunto de varias OSC para ofrecer a las comunidades urbanas pobres la oportunidad de crear cocinas comunitarias y establecer foros de debate en línea sobre la respuesta a la pandemia.

Además de satisfacer las necesidades básicas, las OSC también han proporcionado espacios y estructuras para crear proyectos de desarrollo alternativo. Esto es evidente en el ámbito de la seguridad alimentaria, en el que varias OSC lideraron iniciativas comunitarias de producción de alimentos en común, lo que fue crucial para abordar los problemas de seguridad alimentaria que surgieron inmediatamente después de los cierres. Gracias a estas iniciativas de producción comunitaria de alimentos, las circunscripciones rurales pudieron hacer frente al hambre. Algunas organizaciones de pobres urbanos han liderado la recuperación de tierras ociosas mediante la plantación de verduras en estas parcelas. Más común es la formación de cocinas comunitarias que reforzaron los sistemas de ayuda mutua entre las comunidades urbanas pobres para hacer frente a las necesidades inmediatas, como la alimentación.

Algunas OSC se han centrado en el desarrollo de planes para



Foto por Ivan Samkov de Pexels



atender las preocupaciones de los grupos marginados que corren el riesgo de quedarse atrás. En Gabón, 60 OSC crearon una plataforma llamada GAC-COVID-19 (Grupo de Alternativa Comunitaria contra COVID-19) con un plan operativo centrado en la movilización comunitaria para apoyar a los presos políticos.

Facilitar la ayuda humanitaria internacional

En muchos casos, las OSC locales se asociaron con organizaciones humanitarias internacionales para facilitar la entrega eficiente de la ayuda humanitaria. En Honduras, las OSC trabajaron con organismos que dirigieron recursos a diversos temas y áreas: FLM (Federación Luterana Mundial), EcoViva, CAFOD, Trocaire, DIAKONIA, PPM, CARE, la Unión Europea, OXFAM y Action Aid. Su intervención se dirigió a los sectores: producción de granos básicos, campañas de prevención, apoyo a las familias con kits de bioseguridad y ayuda alimentaria, bioseguridad, protección del medio ambiente, atención psicológica y seguimiento de los casos de violencia y protección de las vulnerabilidades de los derechos humanos durante la pandemia de COVID-19.

Difusión de información y educación

Las OSC en Afganistán han apoyado a los comités nacionales en la ampliación de los mensajes de salud pública al público, incluyendo cómo hacer frente al estrés y otros impactos psicológicos de COVID-19. Las OSC de Kenia han contribuido a localizar la información relacionada con el COVID-19 para que las comunidades locales puedan entenderla. En Nicaragua, las OSC lanzaron una campaña de información para orientar y educar a la población sobre las medidas que deben seguir para evitar la infección. En el Líbano, se está trabajando en un programa sobre justicia social desde el punto de

entrada de la protección social y las OSC han celebrado seminarios web en línea para repensar los conceptos y las prácticas de la justicia social, la protección social y los contratos sociales en la región. Algunas de las campañas relativas a la difusión de información abordaron las capacidades de los sectores destinatarios para acceder a la información. Por ejemplo, las OSC de Albania llevaron a cabo varias iniciativas que involucran a los jóvenes, como el uso de herramientas digitales para el empoderamiento de los jóvenes, la realización de diálogos en línea y la formación. También proporcionaron suscripciones a Zoom para que sus OSC miembros pudieran adaptarse a las nuevas formas de trabajo durante la pandemia.

Parte del trabajo consistió en actividades educativas entre los jóvenes. En la India, las OSC, en consulta con la comunidad, reunieron a los jóvenes que habían regresado de las ciudades metropolitanas después de perder sus empleos debido al cierre para debatir el papel de los pueblos indígenas en la protección de su tierra



Foto por Virendra Kadam de Pexels



ancestral y animarles a trabajar y ganar dinero utilizando los recursos que se encuentran en el pueblo. Una OSC de África se dedica a elaborar libros de trabajo semanales accesibles en línea y en copias impresas, lo que mantiene a muchos niños comprometidos con la educación.

Asistencia jurídica y monitoreo

Algunas OSC han prestado asistencia jurídica a los ciudadanos que fueron llevados a los centros de contención de COVID-19. Las ONG juveniles europeas se coordinaron con la Comisión Europea y otros organismos internacionales para monitorear y hablar sobre la situación de los derechos humanos y los problemas de corrupción en países como Bulgaria.

Investigación y evaluación de las necesidades de las circunscripciones

CSOs have also generated research and studies on strategies
Las OSC también han generado investigaciones y estudios sobre estrategias para la implementación de respuestas a COVID-19 a pesar de enfrentarse a grandes retos en la medición, coordinación y realización de diálogos sobre estrategias nacionales de respuesta a la emergencia. También existen buenas prácticas en la realización de evaluaciones conjuntas y coordinadas de las necesidades de sus circunscripciones, no sólo para coordinar las operaciones de auxilio, sino también como punto de partida para la incidencia y para exigir transparencia y responsabilidad al gobierno.

Incidencia política, garantizando la transparencia y la rendición de cuentas

A pesar de la reducción de los espacios cívicos, las OSC han seguido

participando en la incidencia política para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en las respuestas de COVID-19 en sus respectivos países.

En Kirguistán, la fundación pública Nash Vek inició la creación de un grupo de monitoreo de la distribución de la ayuda alimentaria a través del Consejo de Coordinación de los organismos estatales de la República Kirguisa.

En Nigeria, un grupo de OSC creó una coalición para monitorear el desembolso de fondos destinados a la asistencia de COVID-19 a grupos vulnerables. La Red Africana para el Medio Ambiente y la Justicia Económica (ANEEJ), junto con sus ocho socios procedentes de las seis zonas geopolíticas del país que ejecutan el proyecto MANTRA (Monitoreo de Transparencia y Rendición de Cuentas en la Gestión de Activos Devueltos), monitoreó la distribución de los US\$322,5 millones devueltos del botín del difunto general y ex dictador nigeriano Sani Abacha a través del Programa de Transferencia Condicionada de Efectivo del Gobierno Federal.



Foto por Mehmet Turgut Kirkgoz de Pexels



Photo by Ryutaro Tsukata from Pexels



Síntesis de las principales recomendaciones



APROPIACIÓN

Garantizar una mayor apropiación democrática y una asociación estratégica. La respuesta a la pandemia y la reconstrucción de la economía requieren un enfoque de toda la sociedad. Esto sólo puede facilitarse mediante la colaboración del gobierno con las diferentes partes interesadas, incluida la sociedad civil.

Proteger la AOD y alinear las estrategias con las prioridades nacionales de desarrollo. Las estrategias del gobierno para hacer frente a la COVID-19 y la ayuda al desarrollo deben alinearse con las prioridades y los objetivos de desarrollo nacionales. La ayuda al desarrollo no debe ir acompañada de condicionalidades, especialmente las que sirven a los intereses de los países donantes.

Aumentar la movilización de recursos locales y ampliar las subvenciones en lugar de los préstamos. La movilización de fondos de múltiples partes interesadas es fundamental para contener la pandemia y ayudar a la recuperación económica. Como parte de "reconstruir mejor", los grupos de trabajo nacionales deberían involucrar concretamente a los socios de desarrollo en la movilización de recursos locales. Los donantes también deberían conceder más subvenciones en lugar de préstamos a los países socios para evitar una carga adicional de la deuda. La ayuda relacionada con COVID-19 debería sumarse a la AOD tradicional.



ALIANZAS INCLUSIVAS

Garantizar colaboración y alianza de múltiples partes interesadas para el desarrollo. Los gobiernos y los socios para el desarrollo deben incluir a las OSC, a diversos expertos y a otras partes interesadas en los grupos de trabajo, comités u otros mecanismos creados a diferentes niveles para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Su inclusión sólo será significativa, sustancial e impactante si las asociaciones se basan en la participación democrática e igualitaria.



TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Compartir y publicar regularmente información oportuna y precisa. Los gobiernos deben publicar periódicamente datos precisos, en tiempo real, completos y gratuitos sobre la respuesta al COVID-19, incluyendo, entre otros, los siguientes: datos relacionados con la infección, datos de la respuesta médica, datos de la asignación financiera y del desembolso de la ayuda.

Crear una plataforma unificada para el acceso de los ciudadanos. Los gobiernos deben facilitar el acceso a la información y los datos sobre todos los asuntos relacionados con la respuesta al COVID-19 para el público, incluyendo pero no limitándose a las OSC, el mundo académico, el sector privado y el público en general. Para ello, los gobiernos deberían crear una plataforma unificada para que los ciudadanos puedan obtener los documentos y la información necesarios relacionados con la pandemia



ENFOQUE EN RESULTADOS

Implementar un marco de gestión de la pandemia centrado en los resultados. Los gobiernos deben implementar un marco de gestión basado en resultados para guiar la toma de decisiones. Este marco de gestión también debe incluir mecanismos eficaces de monitoreo y evaluación.



NO DEJAR A NADIE ATRÁS

Adoptar un enfoque basado en los derechos humanos en la respuesta a la pandemia. Los gobiernos deben adoptar un enfoque basado en los derechos en su respuesta a COVID-19. Las estrategias gubernamentales deben adherirse a las obligaciones y normas de derechos humanos.

Defender la igualdad de género. Los gobiernos deben adoptar un enfoque sensible al género y que tenga en cuenta las realidades específicas de género que agravan los impactos de la pandemia del COVID-19. El desembolso de la ayuda y la asistencia también debería tener en cuenta las necesidades de la población desde el punto de vista del género.

Fortalecer el sistema de salud pública y las medidas de protección social. Los gobiernos deben reforzar los sistemas de salud pública y las medidas de protección social mediante la mejora de las políticas, las infraestructuras y las inversiones. También debe garantizar el acceso de los ciudadanos a servicios, como la educación básica y el trabajo decente, que se ajusten a los contextos específicos.

Incluir las necesidades de los sectores marginados en la respuesta a la pandemia. El gobierno debe garantizar que las necesidades y preocupaciones de los grupos subrepresentados y marginados se incluyan en las respectivas respuestas a la COVID-19. Deben proporcionarse transferencias fiscales específicas a los trabajadores del sector informal durante estas emergencias, incluidos los ciclistas, los trabajadores de escuelas privadas y los taxistas. Deberían suspenderse o reducirse las obligaciones fiscales de los trabajadores del sector informal/de las pequeñas y medianas empresas.



ESPACIOS CÍVICOS

Proteger los espacios cívicos para la participación de las OSC. Garantizar que, como mínimo, se permita a las OSC operar en un entorno seguro y de apoyo, poniendo fin a las interferencias innecesarias en sus prácticas y operaciones. Las OSC también deben disponer de espacios para participar en los debates oficiales para la respuesta a la pandemia, y/o formar parte de las



REFERENCIAS:

- Adesina, A. (2020, 6 de abril). Opinion: The pandemic is no time for fiscal distancing. Recuperado de CNN: <https://edition.cnn.com/2020/04/03/africa/adesina-fiscal-distancing-opinion/index.html>
- Agence France Press (2020, 21 de mayo). Covid-19: Bolivian health minister held for suspected graft in the purchase of ventilators. New Straits Times. Recuperado de: <https://www.nst.com.my/world/world/2020/05/594259/covid-19-bolivian-health-minister-held-suspected-graft-purchase>
- Azcona, G., Antra, B., Encarnacion, J., Plazaola-Castaño, J., Seck, P., Staab, S., and Turquet, L. (2020, September 2). From Insights to Action: Gender Equality in the wake of COVID-19. Recuperado de: <https://news.un.org/en/story/2020/09/1071502>
- Beltran, M. (2020, October 9). Amid a Pandemic, Evictions Plague the Philippines: How can Filipinos, especially low-income families, stay at home when they are being forced into homelessness?. Recuperado de The Diplomat: <https://thediplomat.com/2020/10/amid-a-pandemic-evictions-plague-the-philippines/>
- Bhalla, N. (2020, May 6). Forced evictions leave 5,000 Kenyan slum dwellers at risk of coronavirus. Recuperado de Reuters: <https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-kenya-homelessness-idUSKBN221VC>
- Breed, D and Sternberg, L. (2020, July 22). How are aid budgets changing due to the Covid-19 crisis? Recuperado de: <https://devinit.org/resources/how-are-aid-budgets-changing-due-covid-19-crisis/>
- Caliwan, C. (2020, April 19). Community quarantine violators exceed 130K: PNP. Recuperado de Philippine News Agency: <https://www.pna.gov.ph/articles/1100314>
- Charlier, P. and Varison, L. (2020). Is COVID-19 being used as a weapon against Indigenous Peoples in Brazil?, *The Lancet*, 396(10257), 1069-1070. Recuperado de DOI:[https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)32068-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)32068-7)
- Cheng, C., Barceló, J., Hartnett, A., Kubinec, R. and Messerschmidt, L. (2020). COVID-19 Government Response Event Dataset (CoronaNet v.1.0). *Nature Human Behaviour*, 4, 756–768. Recuperado de: <https://doi.org/10.1038/s41562-020-0909-7>
- CNN Philippines Staff (2020, May 13). ‘Garbage in, garbage out’: Senators slam DOH for erroneous COVID-19 data. CNN Philippines. Recuperado de: <https://www.cnnphilippines.com/news/2020/5/13/DOH-COVID-19-data-error-Duque-Senate.html>
- CSO Partnership for Development Effectiveness (CPDE). (2020a). Why effectiveness matters in the response to the COVID-19 pandemic. Recuperado de: <https://csopartnership.org/2020/07/why-effectiveness-matters-in-the-response-to-the-covid-19-pandemic/>
- _____ (2020b). CPDE Policy Conference 2020 Declaration: Development effectiveness for a sustainable response to Covid-19. Recuperado de: <https://csopartnership.org/2020/11/cpde-policy-conference-declaration/>
- Dearden, Nick (2020, April 8). The free market will only deepen the coronavirus crisis. Recuperado de Al Jazeera News: <https://www.aljazeera.com/opinions/2020/4/8/the-free-market-will-only-deepen-the-coronavirus-crisis>
- Development Initiatives (2020, Noviembre). Tracking aid flows in light of the Covid-19 crisis.
- Fernandes, Deepali (2020, June 15). Remittance and Beyond: COVID-19 Impacts All Forms of Migrant Contributions to Development. Recuperado de International Organization for Migration: <https://weblog.iom.int/remittances-and-beyond-covid-19-impacts-all-forms-migrant-contributions-development>
- Friesen, J. and Pelz, P.F. (2020). COVID-19 and Slums: A Pandemic Highlights Gaps in Knowledge About Urban Poverty. *JMIR Public Health and Surveillance* 6(3). Recuperado de: DOI 10.2196/19578



- Global Partnership for Effective Development Cooperation. (2020, 6 de julio). Effective Development Co-operation in the Face of COVID-19. [effectivecooperation.org. https://www.effectivecooperation.org/content/effective-development-co-operation-face-covid-19](https://www.effectivecooperation.org/content/effective-development-co-operation-face-covid-19)
- Gonzales, Cathrine (2020, 11 de mayo). 183 barangay officials being investigated by PNP for 'corruption' in SAP distribution. Inquirer.net. Recuperado de <https://newsinfo.inquirer.net/1272955/183-barangay-officials-being-investigated-by-pnp-for-corruption-in-sap-distribution#ixzz6ixRPIh11>
- Guzman, R. (2020, 13 de junio). PH Debt: All's well that swells. IBON. Recuperado de: <https://www.ibon.org/ph-debt-all-well-that-swells>
- International Labour Organisation. (2018). Women and men in the informal economy: A Statistical Picture Third Edition. Recuperado de: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_626831.pdf
- International Labour Organisation. (2020a, junio). The effects of COVID-19 on trade and global supply chains. Recuperado de: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_746917.pdf
- _____. (2020b, 30 de junio). ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. Fifth edition Updated estimates and analysis. Recuperado de: https://www.ilo.org/wcm-sp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_749399.pdf
- _____. (2020c, September 23). ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. Sixth edition Updated estimates and analysis. Recuperado de: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_755910.pdf
- _____. (2020d, May). COVID-19 crisis and the informal economy. Immediate responses and policy challenges. Recuperado de: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/briefingnote/wcms_743623.pdf
- _____. (2020e). Youth & COVID-19: Impacts on jobs, education, rights and mental well-being. Recuperado de: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_753026.pdf
- International Monetary Fund (2020a, octubre). World Economic Outlook. Recuperado de: <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world-economic-outlook-october-2020>
- _____. (2020b, de Octubre). Regional economic outlook. Europe. IMF. Recuperado de: <https://www.imf.org/en/Publications/REO/EU/Issues/2020/10/19/REO-EUR-1021>
- International Press Institute. (2020). COVID-19 Media Freedom Monitoring. Recuperado de: <https://ipi.media/covid19-media-freedom-monitoring/>
- Moreira da Silva, J. and Moorehead, S. (2020, 25 de marzo). Opinion: Aid in the time of COVID-19 — 3 things donors can do now. Recuperado de: <https://www.devex.com/news/opinion-aid-in-the-time-of-covid-19-3-things-donors-can-do-now-96848>.
- National Commission on Indigenous Peoples (Philippines) (2020, 6 Noviembre). The Impact of COVID-19 on the Rights of Indigenous Peoples under the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples: A Philippine Experience. Recuperado de: <https://www.ohchr.org/Documents/Issues/IPeoples/EMRIP/Session13/submissions/AP/2020-12-01-statement-philippines-ncip.docx>
- Obaji, P. (2020, 9 de sept). Women 'abused' by police enforcing COVID-19 rules in Nigeria. Recuperado de Al Jazeera News: <https://www.aljazeera.com/amp/features/2020/9/9/women-abused-by-police-enforcing-covid-19-rules-in-nigeria>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020a). Turning hope into reality OECD Economic Outlook, December 2020. Recuperado de: <https://www.oecd.org/economic-outlook/>



- _____. (2020b). COVID-19 in Latin America and the Caribbean: An overview of government responses to the crisis. Recuperado de: <https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-in-latin-america-and-the-caribbean-an-overview-of-government-responses-to-the-crisis-0a2dee41/>
- _____. (2020c). COVID-19 crisis response in MENA countries. Recuperado de: <http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-crisis-response-in-mena-countries-4b366396/>
- _____. (2020d). COVID-19 GLOBAL PANDEMIC: Joint Statement by the OECD Development Assistance Committee on the Covid-19 crisis. Recuperado de: <https://www.oecd.org/dac/development-assistance-committee/daccovid19statement.htm>
- _____. (2020e). Frequently asked questions on the ODA eligibility of COVID-19 related activities. Recuperado de: https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/ODA-eligibility_%20of_COVID-19_related_activities_final.pdf
- Raga, S. and te Velde, D.W. (2020, mayo). Donor responses to COVID-19: Country allocations. Recuperado de: <https://set.odi.org/donor-responses-to-covid-19-country-allocations/>
- Ranada, P. (2020, 23 de mayo). Plight of stranded OFWs: Gov't still processing 8,000 certificates. Rappler. Recuperado de: <https://www.rappler.com/nation/plight-of-stranded-ofws-government-processing-certificates-backlog>
- Report outlines long road to post-COVID recovery for Latin America and Caribbean (2020, 6 de octubre). UN News. Recuperado de: <https://news.un.org/en/story/2020/10/1074822>
- Reuters. (2020, 17 de julio). Kenya police arrest prison warden over rape of patient in COVID-19 quarantine. Recuperado de: <https://news.trust.org/item/20200717134549-ew9gt>
- Sayeh, A and Chami, R. (2020, junio) Lifelines in Danger. Recuperado de International Monetary Fund: <https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2020/06/pdf/COVID19-pandemic-impact-on-remittance-flows-sayeh.pdf>
- Shahbaz, A. and Funk, A. (2020). The Pandemic's Digital Shadow. Recuperado de: <https://freedomhouse.org/report/freedom-net/2020/pandemics-digital-shadow>
- Sumner, A., Ortiz-Juarez, E. and Hoy, C. (2020). Precarity and the pandemic: COVID-19 and poverty incidence, intensity, and severity in developing countries. UNU WIDER Working Paper 2020/77. Recuperado de: <https://www.wider.unu.edu/sites/default/files/Publications/Working-paper/PDF/wp2020-77.pdf>
- Tew, R., Knox, D. and Dodd, A. (2020, 17 de abril). Coronavirus and aid data: What the latest DAC data tells us (Briefing). Recuperado de Development Initiatives: <https://devinit.org/resources/coronavirus-and-aid-data-what-latest-dac-data-tells-us/>
- Tröster, B., Küblböck, K. Unprecedented but not Unpredictable: Effects of the COVID-19 Crisis on Commodity-Dependent Countries. Eur J Dev Res 32, 1430–1449 (2020). <https://doi.org/10.1057/s41287-020-00313-9>
- United Nations Development Program. (2020, 11 de junio). COVID-19 could prove “disastrous” for Zimbabwe, UNDP study finds. Recuperado de: <https://www.un.org/africarenewal/news/coronavirus/covid-19-could-prove-%E2%80%9Cdisastrous%E2%80%9D-zimbabwe-undp-study-finds>
- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation. (2020, 21 de abril). Startling digital divides in distance learning emerge. Recuperado de: <https://en.unesco.org/news/startling-digital-divides-distance-learning-emerge>



United Nations General Assembly (2020, 6 de octubre). As Sustainable Development Efforts Fall Behind, Second Committee Delegates Stress Bolstering International Cooperation in Combating COVID-19. Recuperado de: <https://www.un.org/press/en/2020/gaef3532.doc.htm>

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UN OCHA). (2020). Global Humanitarian Response Plan COVID-19: United Nations Coordinated Appeal April-December 2020. Recuperado de: <https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Global-Humanitarian-Response-Plan-COVID-19.pdf>

United Nations General Assembly (2020, 20 de julio). Report of the Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples, José Francisco Calí Tzay. Recuperado de: <https://undocs.org/en/A/75/185>

United Nations Women (2020a). From Insight to Action: Gender Equality in the Wake of Covid-19. Recuperado de: <https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/gender-equality-in-the-wake-of-covid-19-en.pdf?la=en&vs=5142>

_____. (2020b, 16 de septiembre). COVID-19 and its economic toll on women: The story behind the numbers. Recuperado de: <https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/9/feature-covid-19-economic-impacts-on-women>

_____. (2020c, 9 de abril). Policy brief: The impact of COVID-19 on women. Recuperado de: <https://asiapacific.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women-en.pdf?la=en&vs=1406>

United Nations World Tourism Organization. Tourism and COVID-19 – unprecedented economic impacts. Recuperado de: <https://www.unwto.org/tourism-and-covid-19-unprecedented-economic-impacts>

Van de Poel, J. (2020, 15 de junio). Covid-19 and Official Development Assistance: current issues and challenges. Recuperado de: https://www.eurodad.org/covid19_oda_challenges

Villota, C. and Casanova, J.H. (2020). CONCORD Aidwatch 2020. Recuperado de: https://concordeurope.org/?smd_process_download=1&download_id=19732

World Bank. (2020a). World Bank East Asia and Pacific Economic Update, October 2020: From Containment to Recovery. Recuperado de: <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1641-3>

_____. (2020b). World Bank Confirms Economic Downturn in Sub-Saharan Africa, Outlines Key Policies Needed for Recovery. Recuperado de: <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/10/08/world-bank-confirms-economic-downturn-in-sub-saharan-africa-outlines-key-policies-needed-for-recovery>

_____. (2020c). The World Bank in Albania: Overview. Recuperado de: <https://www.worldbank.org/en/country/albania/overview#3>

_____. (2020d). The World Bank in Armenia: Overview. Recuperado de: <https://www.worldbank.org/en/country/armenia/overview#3>

_____. (2020e). The World Bank in Bulgaria: Overview. Recuperado de: <https://www.worldbank.org/en/country/bulgaria/overview#3>

_____. (2020f). WHO Director-General's opening remarks at Executive Board meeting, 5 de octubre 2020. Recuperado de: <https://www.who.int/director-speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-executive-board-meeting>

World Health Organisation Western Pacific Regional Office (WHO-WPRO) (2021, January 6). COVID-19 Situation in WHO - Western Pacific Region.





Photo by Ryutaro Tsukata from Pexels

Resúmenes de las principales conclusiones



Estudios de caso de las circunscripciones regionales y sectoriales



Resúmenes de las principales conclusiones

Estudios de caso de las circunscripciones regionales



África

Gabón

Kenia

Nigeria

Asia

India

Kirguistán

Filipinas

Europa

Albania

Armenia

América Latina y el Caribe

Subregión andina Argentina

Subregión de América Central y México

Oriente Medio y Norte de África

Argelia

Irak

Yemen



Resúmenes de las principales conclusiones

Estudios de caso de las circunscripciones sectoriales



Organizaciones religiosas

Zimbabue

Grupos feministas

Kirguistán

Pueblos indígenas

Filipinas

Migrantes y diáspora

Hong Kong

Tailandia

Rural

Indonesia

Filipinas

Bolivia

Jóvenes

Afganistán

Bulgaria

Camerún

Colombia

Egipto

El Salvador

India

Líbano

África del Sur

Zimbabue